

**ESTAFA A LA COMUNIDAD
DE INDIOS DE
SAN SEBASTIÁN DEL SÍGSIG**

ESTAFA A LA COMUNIDAD DE INDIOS DE SAN SEBASTIÁN DEL SÍGSIG

Guillermo Segarra Iñiguez

*Miembro Correspondiente de la
Academia Nacional de Historia*



2005

Estafa a la Comunidad de Indios de San Sebastián del Sigsig

Guillermo Segarra Iñiguez

1ra. Edición: Ediciones ABYA-YALA
12 de Octubre 14-30 y Wilson
Casilla: 17-12-719
Teléfono: 2506-247/ 2506-251
Fax: (593-2) 2506-267
E-mail: editorial@abyayala.org
Sitio Web: www.abayala.org
Quito-Ecuador

Levantamiento
de textos: Juan Carlos Segarra Balarezo

Ilustraciones: Archivo del autor

Impresión: Docutech
Quito - Ecuador

© Guillermo Segarra Iñiguez
© Universidad Politécnica Salesiana

Derechos reservados

ISBN: 9978-22-529-3

Impreso en Quito-Ecuador, julio 2005

En un país así, los escritores tienen dos deberes: denunciar y revelar. Denunciar estos hechos contrarios al respeto debido al ser humano y revelar que las personas víctimas de este trato son hombres que no han perdido sus virtualidades humanas.

José María Arguedas

(Primer Coloquio de escritores iberoamericanos y alemanes – Berlín 1962.)

CONTENIDO

Proemio	9
I. Esa tal comunidad	11
II. Documentos de buena ley	19
III. Piezas de cuño falso.....	39
IV. Conclusiones pertinentes.....	79
V. Apendice: padrones de indios quintos 1756 – 1757	87

PROEMIO

En 1977, en el Volúmen LX del Boletín de la Academia Nacional de Historia, se publicó mi estudio histórico-jurídico sobre los supuestos títulos de la Comunidad de Indios de San Sebastián del Sígsig en el que, por no haberse corregido las pruebas, se habían deslizado muchísimos gazapos; además de que no se lo ilustró con la reproducción de documentos auténticos que respaldaban mis opiniones. Por otro lado, ni el Boletín ni la separata fueron asequibles a los principales destinatarios de mi trabajo: los vecinos del Sígsig y los integrantes de la expresada Comunidad. De todas maneras, a los etnohistoriadores les habrá satisfecho mi relato documentado de la más ruin estafa de que haya memoria en los anales de los perjuicios irrogados a los miserables indios; hecho que no ocurrió en la colonia, como pudiera suponerse, sino en plena república y por sujetos fácilmente identificables.

Cuando joven, esto ya hace muchos años, yo colaboraba en varios órganos de comunicación con artículos sobre Sígsig, y alguna vez exalté el amor a la libertad demostrado por la Comunidad de Indios de San Sebastián del Sígsig que, para no seguir subyugados a las mitas, diezmos y otras cargas, compraron al rey de España el territorio que ocupan con exorbitantes cantidades de oro y esmeraldas. Mi padre había conocido esos “títulos” protocolizados en Notarías del Sígsig y de Gualaceo, y desaprobó el contenido de mi artículo porque esos papeluchos protocolizados –me dijo enfáticamente- no son más que una burda falsificación. Mi articulejo se basaba en los informes de los señores

Notarios, que entonces no prestaban facilidades al investigador, sino que se limitaban a informar lo que ellos entendían o sabían del asunto.

Mi padre, sin ser abogado, era experto en asuntos legales y asumí que su crítica debía tener fundamento; pero antes de allanarme a esa opinión me consagré a investigar en el Archivo Nacional de Historia, donde forzosamente debían reposar los originales de tan opulenta transacción, pero allí no existe nada al respecto. Debo, pues, a la acertada crítica de mi padre D. Elías Segarra el haberme engolfado en la investigación de la verdad sobre tales títulos de la Comunidad de Indios, y por ello, con la devoción de siempre, dedico a su memoria esta segunda edición de mi estudio.

La escrupulosa revisión de datos fidedignos en los archivos y en las piezas originales por mi adquiridas, me han permitido realizar un trabajo que lo juzgo incontrovertible, por lo que no volveré a tocar el tema. Me complacería, sí, que otros autores tomen la posta para rebatir mis asertos, confirmarlos o ampliarlos. En los archivos existe abundante material.

I

ESA TAL COMUNIDAD

Los juristas y sociólogos que elaboraron la *Ley de Organización y Régimen de las Comunas*, expedida en 1937, sin duda tuvieron en mientes propiciar el retorno del indio y la incorporación del campesino en general al *ayllu*, sistema político, social y económico que en la civilización prehispánica del área andina probó su eficacia plena. Por cierto, también durante la colonia se procuró mantener el *ayllu*, aunque con miras a explotar al máximo la sumisión de la raza vencida. ¿En qué consistió tan socorrido sistema? Según Von Hagen, el *ayllu* se ha definido “*como un clan de familias conviviendo en un área restringida con participación colectiva de tierras, animales, cosechas...El indio nacía formando parte del Ayllu.*”

Merecen todo apoyo y simpatía aquellas comunas que, acatando las normas para su cumplido desarrollo y avivando rescoldos de antiguas estructuras eficaces, fomentan la paz, el amor y la comprensión entre los miembros de su clan o gran familia, bregan por alcanzar metas de bienestar colectivo y ayudan a labrar con su esfuerzo constante el progreso del país. A quienes de una manera u otra cultivamos disciplinas antropológicas nos place constatar el rápido desenvolvimiento que tales organizaciones cobraron a raíz de la expedición de la citada Ley, así como la feliz integración de las masas campesinas a la nacionalidad.

Las excepciones, por cierto, confirman la regla: pues hay ciertas comunas que constituyen un fraude rotundo. El presente trabajo documentado, objetivo y veraz gira precisamente en torno a una de éstas, la *Comunidad de Indios de San Sebastián del Sigsig*, y a ciertos ‘papeles’ ridículos que los miembros de ella califican de **“títulos” otorgados a su favor por el rey de España**, sobre un latifundio tan dilatado que se extiende desde el río Shío, medianero entre los cantones Gualaceo, Chordeleg y Sigsig, hasta las jibarias del otro lado de la cordillera oriental en el cantón Gualaquiza.

Al abordar tan vidrioso tema no abrigo intención alguna de avasallar derechos, aunque sí aspiro a demoler el nocivo fetiche de los **“títulos otorgados por el rey”**, causa evidente del atraso que soporta Sigsig, no obstante contar con gente bien dotada y con recursos naturales abundantes.

La mencionada comunidad de indios no conserva de tal ni siquiera el membrete, pues últimamente ha dado en apodarse *Gobernación de Indígenas de la propiedad del Sigsig*, evidenciando no alimentar más propósito que el de ejercer dominio sobre el territorio cantonal. Si el alma común, la tradición del ayllu, la homogeneidad étnica y otras condiciones aglutinantes constituyen la esencia de una comunidad indígena, es de admirar que, sin asomo de tales requisitos, la Comunidad de Indios de San Sebastián del Sigsig haya vegetado, como en ninguna otra del país, por más de cuatrocientos sesenta años, sin que ni el decreto de Bolívar, que extinguió las comunidades de indios, le hubiera causado mella. Se constituyó esta comunidad hacia 1540 y, apenas nacida, sus integrantes se amalgamaron con mitayos forasteros de casi toda la sierra ecuatoriana constreñidos a sacar para sus encomenderos el oro de Santa Bárbara en el Sigsig, y con los propios españoles, que desde 1535 se establecieron en el Asiento de Minas de Santa Bárbara, actual caserío de Pueblo Viejo.

Al comentar la trascendental importancia de la Ley de Organización y Régimen de las Comunas, cuando ésta se expidió, el destacado indigenista Dr. Rafael Galarza Arízaga nos ofreció, en forma precisa y luminosa, la silueta ideal de una comuna: *“...Sumando esfuerzos, mancomunando intereses, los indígenas abrieron caminos y canales de regadío,*

explotaron maravillosamente los metales, prepararon el suelo y recolectaron sus frutos al son de cantos, melodías y danzas, en las cuales el individuo se refundía en el alma del grupo y participaba de sus eclosiones vitales...”. Lo contrario de esos magníficos atributos distinguió siempre a la Comunidad de Indios del Sísig: caminos y canales de riego destruidos en perjuicio de comuneros y no comuneros; miles de hectáreas de tierras utilizables para la agricultura y la ganadería en el más criminal abandono porque si hoy, al calor de unas copas y al retintín del cantante y sonante, el cabildo pequeño autoriza a un comunero a cultivar una extensión y plantar su casa, a la vuelta de un tiempo, más corto que largo, y al calor de otras copas y otra paga, dispone asolar mieses y viviendas, pretextando que tierras comunes no son de nadie en particular, y bosques naturales talados sin reforestación alguna. ¿Hacer algo en común? -¡imposible! Si entre esas gentes se muerden y no se tragan. Se le demandó una franja insignificante de tierra en la loma de San Marcos para ampliar la escuela en la que de preferencia se educaban las hijas de los comuneros, y se negaron rotundamente a concederla. Se resisten a pagar los impuestos al predio rústico y al urbano. Obran como dueños y señores de las minas, que por Ley son del Estado. Y un rosario de negativismos que, según parece, a los funcionarios públicos del ramo les dan en la yema del gusto. De lo único que dicha comunidad se preocupa vivamente es de atizar el fetichismo por unos papeluchos apócrifos, supuestos títulos, otorgados por el rey de España, en base a los cuales se ha arrogado la calidad de propietaria de un territorio exageradamente inmenso.

Como si la protocolización tuviese la virtud de redimir las pruebas de los mil y un vicios que las afectan, los referidos títulos fueron protocolizados, a finales del siglo XIX, en Notarías de Gualaceo y del Sísig; y los indios de la comunidad los esgrimen altaneramente cada y cuando se les ocurre perpetrar trapacerías, exacciones, abusos. Por supuesto, las autoridades jurisdiccionales, así como las de la administración fiscal y municipal, por miedo tal vez –y no hay peor enemigo del orden que el miedo en la autoridad- ni siquiera hacen ademán de leer semejantes despapuchos, agachando sumisamente el cogote ante las más abstrusas demandas de la comunidad, no obstante que hasta un lego confitado advertiría, a la primera hojeada de los supuestos “títulos”, un batiburrillo de provisiones sin pies ni cabeza, de certificados que

nada certifican, de anacronismos sin cuento, vicios legales, incongruencias, disparates y extravagancias redactados con inopia de seso y en un estilo pedestre nadita parecido al de los cultos oficiales de la Sala del Real Acuerdo de Justicia de la Audiencia y Cancillería Real de la ciudad de San Francisco de Quito.

En mi archivo conservo varios ológrafos del atildado jurisperito Dr. Jerónimo de Carrión Merodio, cuya sabiduría, perspicacia, ponderación y acierto abundan en cada sentencia. Bien puedo imaginar, pues, la reacción de tan notable magistrado si se alzara de la tumba ante las suplantaciones de su firma y rúbrica en abortos como los títulos en referencia; él que trinaba y echaba truenos aun por nimias deficiencias en la actuación de jueces, abogados, escribanos, procuradores, secretarios, etc. Sin la mínima sombra de duda, esos adefesios se han forjado un siglo después a la fecha que en ellos se ha hecho constar, en plena república, en Gualaceo, en la escribanía del señor Antonio Sevilla, por timadores como Juan María Gomes de Andrade, y otros que hallaron muy cómodo escamotear a los ingenuos indios del Sígsig unas arrobillas de oro y de esmeraldas. Naturalmente, afirmaciones iconoclastas tan rotundas he de probar, como probar me conviene.

Cuando Sígsig se aprestaba a celebrar el centenario de su ascenso a la categoría de cantón, los indígenas de la expresada comunidad solicitaron al Ministerio de Previsión Social y Comunas -¡quién lo creyera!- que se borre del mapa la municipalidad de Sígsig, porque el territorio cantonal es hacienda de la comuna. Si alguien duda de semejante patochada puede revisar el archivo pertinente, en el cual encontrará, además, el informe acerca de tan necia pretensión, aprobado el 5 de febrero de 1964, en el que consta este párrafo: *“La reclamación que hace la Comuna se basa en un título adquirido a la Corona Real y pretende desconocer aun la creación del Consejo Municipal del Sígsig, cuya vida institucional data de hace cien años... En vista de lo expuesto, se desecha las pretensiones de la Comuna”*. No cabía otra cosa que desecharlas; pero, raya en ligereza que los funcionarios ministeriales hayan dado crédito a la existencia de un *“título adquirido a la Corona Real”* como de algo pasado en autoridad de cosa juzgada. ¿Lo leyeron acaso, u optaron por no tomar el ascua por donde quema?

Por las calles del Sígsig se veía, hace unas cinco décadas, a un indígena de la Comunidad, tinterillo de esos que ya no se dan ni en vivo, acompañado de más séquito que abogado en ejercicio, orondo, ostentoso, pingamillo en traje de casimir. En la puerta de su casa hallábase fijado un arancel en tamañas letras: “Se lee cartas por S/. 5,00 (sucres); se escribe cartas por S/. 15,00 (sucres)”;

etc. Desde entonces acá, el arancel se habrá elevado naturalmente a las nubes. Dudo mucho que los propios áulicos de este *rara avis* pudieran haberle reconocido si lo hubiesen visto como yo hecho un bausán, sentadito en el suelo a la vera del Ministerio de Comunas o en los pasillos de ese Portafolio, con cara de concierto apaleado y con un atuendo que se envidiaría hasta en la Corte de los Milagros: sombrero desgachado, más mugre que sombrero; poncho desvaído en hilachas, descubriendo mejor que cubriendo un traje *zhiro* con tantas lacras y remiendos como la ley de Reforma Agraria... ¿Será el Elías Belisario mismo? ¿Le habrán defenestrado los *runas* de la comunidad? De él se trataba, en efecto, y se hallaba en plan de gestiones, representando a la comunidad sin maldita anuencia de ella.

De suerte que no faltaba el pendolista instigador, que engordaba moviendo pleitos sin ton ni son; y tampoco faltaba el influyente abogado, con buenas aldabas y mejores aldabones en los tribunales de justicia, capaz de auspiciar desaguizados de más de marca a sus generosos clientes. ¡La chicana forense es tan fecunda! Los caciques del cabildo pequeño por tradición, odres casi todo el tiempo que duraba su mandato. Tal el marco de la comunidad; y ésta, que se compone por lo general de gente sencilla, laboriosa, normal y apacible, sugestionada por el mito de los **títulos dados por el rey** se vuelve capaz del cielo y de la tierra.

Esa bendita comunidad de indios, en la que militan los que son y los que no son –y donde hasta los que son tienen apenas unos pocos pelitos de indio– causa zozobra a todo el vecindario con sus aspavientos y levantamientos que llaman “huelgas”; en tanto que su deslizada política agraria impacta hondamente en la economía del cantón, afectado como ningún otro del país por el minifundio. Mantener en Sígsig un latifundio kilométrico en total y permanente abandono clama la atención de una autoridad responsable, pues mientras las leyes duer-

men el sueño de los justos, la Justicia y el Derecho perecen. ¿Será dable esperar que algún día, que no sea el del juicio final por la tarde, el Ministerio de Comunas afronte el problema con sagacidad y entereza? ¿Llegará la ocasión de que alguna autoridad competente, sin escatimar su precioso tiempo, estudie escrupulosamente las pruebas aparejadas por la Comunidad de Indios de San Sebastián del Sígsig, ilustrando su juicio previamente a emitir cualquier fallo?

Sin arte ni parte en este negocio, a fuer de historiador y cultor de la ciencia de Justiniano, me propongo presentar en este trabajo elementos de juicio que por un lado estimulen al investigador a ahondar la labor, y por otro arranquen a la comunidad la venda que le impide ver el craso error en que le mantiene inmersa la perversidad de quienes la explotan. Dividiré mi estudio en dos partes: Probaré en la primera como la Comunidad de Indios del Sígsig, no sólo desde 1743-1744, sino desde 1540, usufrutuaba con pleno derecho las tierras comprendidas entre los ríos Shío, Santa Bárbara y Bolo, que no le costaron ni medio penique, siendo falso, de toda falsedad, que haya pagado por ellas al rey de España una arroba de oro del inca y una arroba de esmeraldas, según aparece en los documentos protocolizados en Gualaceo, y cincuenta libras de oro fino, cual reza el documento protocolizado en el Sígsig. En la segunda parte haré un somero análisis de esos instrumentos protocolizados, írritos por carecer de autenticidad, veracidad y genuinidad, que patentizan la más villana estafa de la que haya memoria en los anales de la rapiña y del engaño a los miserables indios.

II

DOCUMENTOS DE BUENA LEY

El abanico que se abre al pie del pueblo del Sígsig, desde la calle Corral hasta el río Santa Bárbara, constituyó en la antigüedad un centro de refinada cultura, como lo atestiguan las maravillosas piezas de oro y otros materiales recabados en hallazgos fortuitos a fines del siglo XIX, y que no es raro hallarlos también en nuestros días. Ese relevante pueblo, de cuyo nombre no quedó memoria, desapareció siglos antes de la llegada de los europeos, quienes encontraron, en 1535, que en el territorio de las actuales parroquias del Sígsig, Güel, Cuchil y Jima se desenvolvían dos parcialidades muy significativas dentro de la Gran Confederación Cañari: DUMA o Sangurima a la izquierda del río Santa Bárbara, y BURIN a la derecha.

No bien fundada la ciudad de Quito, los conquistadores se lanzaron a la explotación de las minas de oro del Sígsig, que los cañaris las venían trabajando desde antes de nuestra era; por lo tanto, desde 1535 el Asiento de Minas de Santa Bárbara constituyó un centro de inusitada actividad. Disponía la ley 10, título 3, libro IV de la Recopilación de Indias que *“cerca donde hubiese minas se procure fundar pueblos de indios”*; en cuya razón se procedió a reducir, hacia 1540, las dos parcialidades sobredichas, dando lugar a la erección del pueblo de SAN SEBASTIÁN DEL SÍGSIG y, por ende, el nacimiento de la comunidad de indios del mismo nombre, una de las primeras si no la primera del Ecuador en orden cronológico.

Según documentos sincrónicos, el procedimiento para reducir las parcialidades a pueblos era el siguiente: El gobierno designaba un poblador *“para que con vara de la Real Justicia los pueda hacer reducir y poblar, en las partes y lugares que le pareciere; y para ello y lo de ello dependiente en cualquier manera, nombre alguaciles indios que ayuden, tomando consideración a que no hagan agravios, lo cual executará con todo el vigor que le pareciere, prendiendo, derribando y haciendo derribar casas y quemarlas, y lo demás que fuere necesario hasta que tenga cumplido efecto lo que se pretende...”*. El poblador examinaba por vista de ojos el sitio, que de acuerdo con lo establecido en la ley 8, tít. 3, L. IV, debía disponer de estas condiciones esenciales: “los sitios en que se han de formar pueblos y reducciones tengan comodidad de aguas, tierras y montes, entradas y salidas, y labranzas, y un EXIDO DE UNA LEGUA DE LARGO, donde los indios puedan tener sus ganados, sin que se revuelvan con los de los españoles”. Hallado el lugar más a propicio, el poblador se dirigía a los caciques más o menos en los siguientes términos: *“Se les manda hagan el dicho pueblo, y se pueblen en él dentro de ocho meses cumplidos y primeros siguientes, so pena de suspensión y privación del dicho cacicazgo; en el qual dicho Pueblo dexen su plaza y calles, y hagan su iglesia y casa de Cabildo y cárcel; todo bien ordenado, a manera de pueblos de españoles, conforme a las ordenanzas y traza que para ello se les ha dado”*.

La legua de tierras que la ley, arriba citada, confería a las comunidades indígenas cabía, imaginariamente, dentro de un círculo cuyo eje sería la puerta del templo; y **de tales tierras los indios sólo gozaban la administración y usufructo, mas nunca el dominio**, puesto que las tierras de comunidad eran bienes realengos, de la Real Corona. Otro sí, el precio que los indios pagaban por esas tierras no se estimaba en dinero, ni mucho menos en oro y esmeraldas, sino en el oneroso cumplimiento de las mitas. La jurisprudencia nos ilumina y presta su autoridad al respecto: En 1746 el Protector de Naturales, en defensa de los caciques Dotansaca exponía: *“...Pues, siendo tierras de comunidad, son de naturaleza inalienables... y la razón es porque ni tampoco en ella (la comunidad entera) reside el dominio de dichas tierras, sino sólo LA ADMINISTRACIÓN Y USUFRUCTO CON CARGO DE SERVIR LAS MITAS por atender al útil público”*. El Dr. Carrión Merodio, cuyas firma y rúbrica aparecen audazmente falsificadas en las pruebas de los indios del

Sísig, en su calidad de Protector General de los naturales de la Audiencia, el 17 de mayo de 1746, expuso al respecto: “...pido se despache la provisión acostumbrada, pues las tierras de comunidad son de naturaleza inalienables por no estar sujetas a dominio particular y ser únicamente pertenecientes a Vuestro Real Fisco, que las ha concedido en MERA ADMINISTRACION Y USUFRUCTO a las comunidades de indios naturales, para que cultivándolas puedan con sus aprovechamientos atender a su sustento, paga de reales tributos y demás pensiones, reservando en sí el DERECHO DE REVERSIÓN para beneficiarlas si se desolasen, o se extinguiesen los beneficiarios. Con que es visto que SÓLO EL REAL FISCO CONSERVA EL DOMINIO DE ELLAS...” (Autos de los caciques de los Azogues. Arch. I. Neira, El Cebollar, Quito). Guste o no a las comunidades de indios, esa era la ley. *Dura lex, sed lex*.

Personas que presumen de indigenistas creen poner una pica en Flandes cuando descubren y exponen cualquier cosilla que les parece confirmar la leyenda negra; y, en lo relativo a la propiedad, por ejemplo, aseguran que los advenedizos despojaron violentamente de sus tierras a los naturales, enfureciéndose porque las leyes otorgaban apenas una legua de territorio a las comunidades de los pueblos y media legua a las de los anejos, que era, dizque, como tirarle una pezuña al dueño del lechón. La verdad es que los indios del incario no poseían bien alguno, pues las tierras de labranza pertenecían a los dioses, al inca y, en préstamo al común, salvo reducidas parcelas que el monarca hacía gracia a ciertos caciques de su simpatía. Los reyes de España sucedieron, por derecho de conquista, a dichos propietarios en el dominio de sus tierras, como taxativamente lo expresa la Cédula del 1.º de noviembre de 1591, sin que se haya despojado a los particulares de bien alguno.

A la minería, que no a la agricultura, dedicáronse de lleno los españoles de la conquista y principios de la colonia, sin que les importara que los indios, aparte de la legua o media legua que la ley asignaba, respectivamente, a pueblos y anejos, tomaran las tierras que les viniese en gana. Tal generosidad se observó inclusive al instrumentar documentos oficiales como el testimonio de fundación de San Juan del Cete o del Sid (1574), actual parroquia de Gualaceo, por el ‘muy magnífico’ capitán D. Alonso de Cabrera: “...al qual dicho pueblo no se le señala términos porque hay muchas tierras baldías a la redonda de donde po-

drán tomar las tierras que hubieren menester y quisieren para sus labranzas, y ganados, y crianza de ellos...”. De documentos consta, así mismo, que a los indios reducidos a Pueblos se les concedió que siguieran cultivando también las tierras que ocupaban en su parcialidad de origen. D. Diego Tasa Andicela, por ejemplo, reducido a Paccha con sus indios de los Cuyes y Xima, ganó Real Provisión para seguir en goce de “*unas tierras llamadas Bolo, Saricava, Marigüiña, Garana, Tescusibelmi, donde era su población vieja*”.

Tan conveniente estimó la Corona esa política, que dispuso: “Con más voluntad y prontitud se reducirán a las poblaciones los indios si no se les quita las tierras y granjerías que tuviesen en los sitios que dejaren. Mandamos que en esto no se haga novedad y se les conserven como las hubiesen tenido antes, para que las cultiven y traten de su aprovechamiento” (ley 9, tít. 3, L. II). Por su parte, las Ordenanzas del Virrey D. Francisco de Toledo, calificadas de monumento de buen gobierno, permitieron a los afligidos indios disfrutar de algunas franquicias. Este magnífico Virrey, por Real Provisión fecha en Los Reyes a 11 de julio de 1577, mandó “a todas y cualesquier Justicias de la dicha ciudad de Quito, a cada una de ellas en su jurisdicción, que todas las tierras que los dichos indios de esta provincia hayan dejado en los pueblos viejos donde antes solían residir, amparéis y defendáis en la posesión de ellas a los dichos indios, cuyas constaren ser...”

Si bien hubo abusos cometidos por españoles, criollos y particularmente mestizos, también es cierto que así los reyes como el Consejo de Indias velaban con celo que los indios sean favorecidos en la concesión de tierras; y en fe de ello he aquí este botón de muestra: Cuando el segundo Marqués de Cañete preguntó al Consejo “si quitaría a los indios que tenían más tierras, todas cuantas no pudieran labrar”, se le contestó terminantemente: “Preguntáis si se les quitarán a los indios las tierras que tienen demás de las que han menester, y lo que en esto parece responderos es: que no solamente no se las quitéis, sino que los favorezcáis y deis más tierras a los que no tuvieran cumplidamente las que hubieran menester”.

Las continuas y apretadas disposiciones para que no se tiranice a los indios, ni menos se los liquide en las mitas mineras, determinaron

que los españoles volvieran los ojos a la tierra y se adueñaran, a tuerto o a derecho, de lo más pintado para la agricultura y la ganadería; razón por la cual aquella amplitud que favorecía a los indios se restringió con apego a las leyes. Por venir como anillo al dedo, transcribo al respecto lo que el capitán de la Infantería Española D. Fernando de Andrade y Rada, en 1773, alegaba en su litigio con los indios de San Bartolomé de Arocshapa sobre tierras sigseñas de Pamar: *“Empero, como semejantes poblaciones fueron en conocido perjuicio del haber real, nuestros Católicos Soberanos, posteriormente, fueron restringiendo aquellas ampliaciones, y sujetando a beneficio de Indulto y Composición, por sus Reales Cédulas expedidas en diez y ocho de septiembre de mil seiscientos setenta y cuatro; diez y ocho de mayo de mil seiscientos ochenta; diez de noviembre de ochenta y cinco y por otras que después se han expedido, hasta la última que se libró, novísimamente, teniendo estas reales determinaciones toda subsistencia, vigor y firmeza, que no pueden contrarrestarse por las viciosas poblaciones hechas antiguamente...”*.

También los indios del Sígsig, con real provisión o sin ella, probando o sin probar que hubiesen ocupado esas tierras desde la gentilidad, en la colonia se apoderaron de extensiones que sobrepasaban inmensamente la legua asignada por la ley, según se desprende de numerosos instrumentos por mí consultados, algunos de los cuales voy a mencionar o a transcribir en apoyo de lo dicho:

- ✦ 1608.- Cuando el Lcdo. Diego de Sorrilla, en 1608, redujo y pobló en Ragdeleg (actualmente, Principal, parroquia de Chordeleg) a los indios del Celeg y Pushío, señaló sus linderos: *“por abajo el río de Santa Bárbara, por un lado el río Shío QUE DIVIDE LAS TIERRAS DE COMUNIDAD DEL PUEBLO DEL SÍGSIG, y por otro unas lomas...”*. Entre Sígsig y Shío median leguas y leguas de extensión.
- ✦ 1641-1648.- D. Joseph Fuera, cacique principal y gobernador del pueblo del Sígsig, el 12 de diciembre de 1641 manifestó al Gobernador de Cuenca D. Juan María de Guevara y Cantos, cuales eran, a la sazón, las tierras de comunidad; dentro de cuya lindación el cacique Puglla solicitó licencia al Corregidor, el 22 de agosto de 1648, para sembrar doce cuerdas en el sitio de Ganzhún, frente a San Antonio, entre los ríos Shío y Santa Bárbara.

- ✦ 1680.- En este año, los indios Francisco, Francisca y Juan Duta sostuvieron pleito contra Sebastián Nugra, todos de la parcialidad de Burín, encomienda del Capitán Antonio de Lugones y Mercado, y sujetos al cacique del Sígsg D. Joseph Puglla, sobre la posesión de los sitios de Sumbray y Sabalul. El Capitán D. Juan Blanco de Alvarado, Alcalde ordinario de Cuenca y Juez comisionado por el General Miguel de Noroña, Corregidor y Justicia Mayor de dicha ciudad, dictó la siguiente sentencia definitiva: *“Fallo que los dhos. Francisco duta, francisca duta, joan duta y demás sus hermanos, y en nombre de los suso dichos duta y demás sus hermanos en la posesión que tienen de las dichas tierras & sitios de Sumbray y Sabalul, desde el camino que va para el pueblo de Gualaseo para la parte de auajo hasta el río de Santa Báruara, reservando las tierras que pertenecen a Luis Saquinuala (...) quedando como quedan todas las demás tierras que caen desde dicho camino que va para el dicho pueblo de Gualaseo para arriba para el dho. Sebastián Nugra y demás indios caciques de la dha. Parcialidad de Burín”*. Si la información que tengo es correcta, los expresados sitios pertenecen a Piruncay, parcialidad de la parroquia de Güel, que linda con el río Shío.
- ✦ 1687.- El mencionado cacique D. Joseph Puglla, en agosto de 1687 puso en venta un solar que la Comunidad de Indios de San Sebastián del Sígsg poseía en la plazoleta del *Usno*, esto es junto a Pumapungo, actualmente barrio residencial de Cuenca, con casa para albergue de los indios sigseños que iban a servir de *oyaricos* en la ciudad. El abuso provocó las consiguientes reclamaciones, pero un congénere de D. Dimas Tijereta amañó a pedir de boca un testamento, por el cual el expresado cacique se convirtió en heredero y dueño del solar. Yo cuento y no comento; pero oigamos –cartas cantan- lo que Da. Francisca Yubra tiene que decir con respecto a este cacique y a sus consortes del cabildo pequeño:
- ✦ 1692.- Hállase a mi vista una real provisión fechada en Quito, a 11 de octubre de 1692, “para que las Justicias de Cuenca la guarden, cumplan y executen, a pedimento del señor Fiscal Protector de Naturales por Da. Francisca Yubra, india del Pueblo de SIGSE”, en la cual se translitera esta denuncia: *“...en dicho mi Pueblo viven y asisten cuatro indios nombrados D. Joseph Puglla, Lorenzo*

Nugra, D. Diego Sánchez, caciques nombrados a falta de propietarios, y Bartolomé Nugra, indio del quinto, los quales de absoluto poder y de sus autoridades vendieron doce quadras de terreno tocantes y pertenecientes a la comunidad (...) a Esteban Brito, mestizo, sólo para aplaudir a Manuel de Ortega, Escribano de Cabildo de la ciudad de Cuenca, que es quien acaudilla al dicho Esteban Brito... Para celebrar la escriptura hicieron un convite de brindes y embriagados otorgaron dicha escriptura... Los dichos caciques nombrados hacen lo que quieren como absolutos dueños, pues aun dentro del Pueblo han vendido muchas tierras constituyéndose dueños, y los indios a quienes tocan y pertenecen si quieren hacer su casa, se las demuele el dicho D. Joseph Puglla y adjudica las tierras a mestizos que asisten en dicho Pueblo...”.

Obviamente, esa venta se declaró nula. Vender significa enajenar y nadie puede enajenar lo que no es suyo. Las tierras de comunidad, como quedó probado, eran realengas, pertenecían a la Real Corona. La denuncia de la Yubra nos pone al tanto de que antaño como hogaño los mandones de la Comunidad de Indios del Sígsg han sido cortados por la misma tijera: autoritarios, crapulosos y abusivos. Tanto en el área urbana como en la rural, enajenan tierras que legalmente no les pertenecen. De otro lado, las mañas de los escribanos del Cabildo de Cuenca, a lo largo de la colonia, no tuvieron correctivo, a pesar de las enérgicas sanciones que les imponía la Real Audiencia y aun el mismo Virrey: forjaban testamentos, falsificaban escrituras, nombraban a sus sirvientes caciques principales destituyendo sin motivo a los propietarios, y cien otros torcidos arbitrios.

- ✦ 1697.- El Lcdo. Aybar, Protector de Indios, en escrito fechado el 18 de noviembre de 1697, alegando por la Comunidad de Indios del Sígsg, expuso que sus tierras lindaban “*con el río de Ziu y con el de Guasayñán; el puesto de Zurzur, hasta el encuentro del río de Ziu y el río arriba de Santa Bárbara y el de Bolo, y en medio de los ríos están dichas tierras de comunidad, y van a dar a dicho Pueblo de Sígsg, hasta la mitad*”. A lo cual replicó el Dr. Nicolás Plaza de Cepeda que “*con pretexto de comunidad quieren coxerse no solamente las tierras de mi parte sino también muchísimas más, que serán más de veinte leguas, que se comprenden dentro de los linde-*

ros del río Ziu, Guasayñan, el puesto de Sursur hasta el encuentro del río de Ziu y el río arriba de Santa Bárbara y el de Bolo, donde hay muchas estancias, hatos de vacas y corrales de diferentes personas, así españoles como indios...”.

- ✦ 1705.- Las epidemias y el hambre azotaron a los pueblos de la comarca azuaya en 1705 y cobraron su tributo. Estos males se extendieron posteriormente a gran parte del Perú. El pavor a las epidemias impelió a los indios a huir, de suerte que los pueblos sufrieron disminución y decadencia. Con tal motivo, en todo el virreinato se practicó una retasa, menos en Cuenca, donde, al contrario, se recargó a los sobrevivientes de trabajos y tributos, pretendiendo completar el “entero”, según se desprende de las reclamaciones del cacique del Sísig D. Diego Sánchez Fuera, quien expone el hostigamiento que reciben sus indios por parte del Corregidor, del Fiel Ejecutor, del Cabildo y su Procurador, y de otros explotadores desnaturalizados. Al traslado de esta queja, en nombre del Procurador del Cabildo de Cuenca contesta D. Antonio Tafur de Valenzuela y Córdova, manifestando que el cacique quejoso tiene empeñado un indio en cien pesos, y al argumento de que en el Sísig no había indios que atendieran las mitas por haberse ausentado, replica: “...*La causa de ausentarse los dichos indios es por las continuas molestias y vejaciones que le hacen los mismos caciques y gobernadores pidiéndoles continuos camaricos, pongos, haciéndolos trabajar sin paga en sus chácaras y sementeras, obligándoles a que les lleuen leña, paja, aues y no lo haciendo castigándoles con rigor, amenazándolos con la Doctrina, con la Mitta y otras opresiones*”.

No obstante las montañas de documentos que existen sobre el tema, los indigenistas rehuyen abordar el capítulo de los abusos perpetrados por los indios ladinos contra sus hermanos de raza y de desgracia, apenas se les confiaba una función de mando. Algún fundamento habrá habido para que se acuñe ese apotegma que zumba como fuer-tazo: “*indio educado, diablo encarnado*”. Los que se jactan de indigenistas sólo escarban los fondos que acaso pudieran empañar la imagen de los peninsulares, disimulando y aun canonizando las malignidades de los indios. Lo que el Sr. Tafur de Valenzuela expone en lo arriba transcrito, coincide con el concepto expresado, en 1573, por el autor de la in-

formación sobre la CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE QUITO, en el acápite 160: “*Son (los indios) amigos de sus casas y tierras; no se ausentan dellas si no es por mal tratamiento de su cacique*”.

Vale la pena transcribir sobre esta materia la opinión de un autor tan versado y sereno como el Dr. José Gabriel Navarro, quien expresaba en su artículo titulado LAS REPARTICIONES DE TIERRAS EN LA COLONIA, lo siguiente: “Una de las causas, la principal acaso, era la tiranía de los propios caciques. Hay que tener en cuenta que España creyó hacer bien conservando el régimen de los incas para el gobierno de los indios. La exagerada veneración del pueblo para los caciques hacía que los abusos de éstos fueran muy graves, sin que las autoridades españolas pudieran remediarlo. En el Archivo Nacional de Madrid hemos visto una Cédula en la que se transcribe las frases del Obispo D. Fray Luis López de Solís en las que manifiesta lo bien que había sentado ciertas providencias implantadas en el reparto y composición de tierras a los indios para impedir los abusos de los caciques. Dice así: “Quitarles de pleitos infinitos que sobre esto de las tierras tenían cada día, con que tomaban los caciques ocasión de robar a los indios excesivamente y atajar las ventas injustas que los caciques hacían, haciéndose señores de todas ellas” (...) “Sobre esta clase de abusos de los caciques –agrega el Dr. Navarro– están llenos los archivos, así como también sobre los fraudes cometidos por los indios en cuanto se vieron favorecidos y amparados por el Rey, el Consejo, los Virreyes y las autoridades, a quienes llegaron sus miles de pleitos que, como la Ley les eximía de pagar las costas, se multiplicaban”.

- ✦ 1708.- En el supuesto título protocolizado en una Notaría del Sígsig, consta esto: “...y haciendo entregan según la signación fecha por el Rey D. Fernando de Sierra y Osorio, a quince de enero de mil setecientos y ocho años...”. Los inventores del título revelan su estolidez piramidal al titular REY al Lcdo. Sierra y Osorio, Oidor y Juez Privativo y Particular para la composición y venta de las tierras del Distrito de la Real Audiencia, quien estuvo en Cuenca, efectivamente, el citado año. No repugna que en tal ocasión, *motu proprio* o a la fuerza, la Comunidad de indios del Sígsig, en ilegal posesión de extensiones desmesuradas de tierras, se hubiese compuesto con el referido Juez. Si tal cosa ocurrió real-

mente, y no se trata de otro embuste de los falsificadores, esa y no ninguna otra prueba le corresponde a la Comunidad presentar en defensa de sus derechos. Al Libro de las composiciones actuadas por el Lcdo. Sierra y Osorio en la Escribanía del Cabildo de Cuenca se lo describe de volumen grande, y afirman quienes lo han consultado que contiene la confirmación de D. Juan de Sosaya, Caballero de la Orden de Santiago, del Consejo de S.M., Presidente, Gobernador y Capitán General de la Real Audiencia de Quito, así como la refrendación de D. Nicolás de Andagoya.

Obraría sensatamente la Comunidad de Indios del Sígsig si redujera a cenizas los papeluchos protocolizados de que estoy hablando, y localizara ese valioso instrumento de 1708. Tinterillo, abogado y mandones de dicha Comunidad justificarían con tal hallazgo los pingües emolumentos que succionan a la indiada; pues la aludida pieza, por su autenticidad irrefragable, haría fe en juicio y fuera de él. De encontrárselo, se constatará que los indios no pagaron dinero alguno por las tierras, ya que la ley 9, tít. 31, L. II, y muchas otras de la *Recopilación de Indias* mandaban que el Oidor Visitador provea a los indios de bienes de comunidad, **sin que se les lleve derechos algunos**, y disponga que planten árboles.

- ✦ 1743-1744.- Queda fehacientemente demostrado que los indios del Sígsig usufructuaban de un territorio cierto, defendido en un sinnúmero de juicios, aproximadamente desde 1540. ¿Cómo es, entonces, que en 1743 compran sus propias tierras por cincuenta libras de oro en polvo; y en 1744 las vuelven a comprar por una arroba de oro y otra de esmeraldas? La siguiente parte de mi trabajo estará dedicada a los infundios protocolizados en Guala-ceo y en el Sígsig, relativos a estas compra-ventas; pero la oportunidad es propicia para situar aquí el momento histórico, que los falsificadores de los “títulos” no tomaron en cuenta, desbarrando en cuanto a fechas, nombres, etc. En 1700, Felipe V asumió el trono de España y bregó ahincadamente por sacar el reino del letargo en que le habían sumido sus antecesores hasta 1746, que le sucedió Fernando VI. En 1739 se restableció el Virreynato del Nuevo Reino de Granada, con su capital en Santa Fe de Bogotá, de modo que la Audiencia de Quito dejó entonces de

depender de Lima y pasó a la jurisdicción de Bogotá. Gobernaba en Quito el Presidente D. José de Araujo y Río, quien hubiera terminado su período en 1744, si las calumnias ante la Corte no le hubiesen atraído la suspensión en el cargo. En 1743 lo subrogó interinamente, su calumniador, el ambicioso D. Manuel Rubio de Arévalo, que luego pagaría cara su alevosía. El Dr. D. Fernando Félix Sánchez de Orellana, único ecuatoriano que llegó a la Presidencia de la Colonia, se posesionó en sus elevadas funciones el 17 de marzo de 1745. Absurdamente, los títulos de la Comunidad de Indios del Sígsig aparecen actuados por Sánchez de Orellana en 1743 y 1744.

Si la comunidad hubiera adquirido sus tierras en composición o compra, no digo por arrobas de oro y esmeraldas sino, supongamos, por un simbólico patacón nada más, automáticamente sus integrantes habrían quedado eximidos de pechos y cargas: No más tamberos, semaneros, oyaricos, yanaconas, pongos, ni servicio alguno en las obras públicas de Cuenca, menos en las casas particulares y haciendas. ¿Cómo es que no recibieron ese beneficio? La razón es muy sencilla: No hubo tal negociación entre el Real Fisco y la Comunidad.

- ✦ 1768.- D. Rosalío Tenenaula, a nombre de los gobernadores, alcaldes mayores, caciques regidores y del común de indios de San Sebastián del Sígsig se queja, en octubre de 1768, de los abusos de las autoridades de Cuenca; pero, en vez de presentar, como hubiera sido lógico y oportuno, algún documento que ampara-se los derechos de su pueblo, específicamente los títulos de 1743-1744, sólo se remite a las severas Ordenanzas del Presidente Lcdo. D. Lope Antonio de Munive, dictadas cien años antes, cuando este diligente funcionario constó personalmente que Cuenca constituía república aparte, sin más Dios ni Ley que la estragada voluntad de sus autoridades fiscales, municipales, militares y eclesiásticas. Para responder a D. Tenenaula, el Cabildo de Cuenca soltó a su Procurador interino Dr. Antonio Serrano y Mora que, entre la andanada de sinrazones de su larga réplica, espetó las siguientes: *“El perjuicio que se les irroga en este servicio es ninguno y antes POR CONTRATO ONEROSO están obligados a las cargas de los viaricos, pues, en atención a estos servicios. (...) SE*

LES HA CONCEDIDO MUCHAS TIERRAS para sus labranzas y reducciones, fuera de la legua, que la ley concede a los pueblos, y de la media legua a los anexos. De modo que sobrándoles suficiente tierra para el cultivo de las mieses de su manutención y pastos de sus ganados, tienen arrendadas estancias cuantiosas a los españoles y, con ciencia cierta de esta demasía de tierras les ha permitido el cabildo el usufructo de ellas bajo la pensión de los viaricos... y de no acudir a la representación del Cabildo, queden los indios privados de las tierras que poseen, aplicándose éstas a los propios de la ciudad para las impensas de las comunes necesidades...". Ciertamente, no gozaba el Cabildo de facultad para conceder a las comunidades ni la legua, ni la media legua, ni la demasía de tierras, porque éstas no eran municipales, destinadas a los propios de la ciudad, sino exclusivamente del Real Fisco; y la ocasión se ofrecía como hecha de encargo para que los indios del Sígisig le chantaran cuatro frescas al Cabildo y a su alzado Procurador, frotándoles en las narices sus títulos de compra de 1743 y 1744. ¿Por qué no lo hicieron? –Llana y sencillamente porque esos títulos aún no habían sido fabricados por los falsificadores.

- ✦ 1775.- Gaspar Cochancela, indio forastero residente en el Sígisig, en declaración rendida el 6 de mayo de 1775 *“dijo que ha visto y le consta que los indios quintos que tienen tierras de comunidad sirven en esta república en las obras que se ofrecen, cuyo ejercicio no lo ha hecho el declarante porque es indio forastero, aunque tiene tierras de asignación en dicho pueblo, en la parcialidad de Burín”*. –A un forastero no se le podía asignar tierras destinadas exclusivamente a los **naturales**, esto es a los del **quinto**, pero ello no viene al caso; lo que cuenta es que, según el Cochancela, los indios del Sígisig, por el usufructo de las tierras comunales estaban sirviendo, en 1775, las mitas acostumbradas; lo que significa que no habían comprado y no eran dueños de esas tierras.

Si el extenso territorio que la comunidad pretende hacer suyo estuviese racionalmente cultivado y beneficiado, cumpliendo su función social, santo y bueno y mil felicitaciones; pero que la comunidad se empeñe furiosamente en mantenerlo ocioso por siglos de siglos, no puede admitirse. En la América antigua, la ligación del hombre con la tierra trajo consigo el concepto de que forzosamente quienes poseían

tierras habían de cultivarlas; en consecuencia, los que no las trabajaban perdían su derecho a poseerlas. El mismo concepto informa la legislación generalmente aceptada en nuestros días bajo el principio de que la tierra es de quien la trabaja. En la actualidad, en nuestro país, las tierras incultas por más de diez años se reputan baldías y pasan de hecho a propiedad del IERAC; por cierto, en las tierras comunales el IERAC (actualmente INEFAN) está obligado por el artículo 28º de la Ley de Reforma Agraria a promover una eficiente y organizada explotación cooperativa, en coordinación con otros organismos especializados del Estado. No mostró el IERAC interés en las tierras comunales del Sígsig para aplicar tal disposición, ni creo que los indios del lugar, por su particular idiosincrasia, se hubieran acomodado a la disciplina cooperativista.

No es del caso promover la reversión de tierras en el Sígsig; lo acertado y político sería lotizarlas, entregando a cada comunero una porción competente, la unidad agrícola familiar, con los respectivos títulos de dominio, lo que vendría a ser una aplicación tardía pero conveniente del decreto dictado por Bolívar en 1882, que extinguía las comunidades de indios y disponía la distribución de sus tierras; así como del decreto que en términos similares promulgara Flores en 1832. A propósito ¿a qué se debió que tales decretos de Bolívar y de Flores no se hubiesen acatado en el Sígsig? –Sígsig era parroquia de Gualaceo y es evidente que ciertos funcionarios seccionales aprovecharon la ocasión para sacar vientre de mal año, vendiendo a los ingenuos indios de la Comunidad sus propias tierras, a precios nunca vistos ni oídos, fabricándoles al efecto unos instrumentos ridículos, que los han fechado en 1743 y 1744, y que tuvieron la virtud de hipnotizar a los compradores.

Si tal comunidad no desapareció entonces para mal de los pecados del Sígsig, loable sería que lo haga ya, o que por lo menos se contenga en los términos del artículo 1º de la Ley de Organización y Régimen de las Comunas. Nada tiene que hacer esa comunidad en las parroquias rurales de Güel y de Cuchil, y mucho menos en la urbana del Sígsig; pues, de acuerdo con el citado artículo “Todo centro poblado QUE NO TENGA LA CATEGORÍA DE PARROQUIA... llevará el nombre de COMUNA...”, esto es: los anejos, barrios, caseríos, parcialidades o como se los quiera llamar. Si los funcionarios del Ministerio

correspondiente han consentido la existencia de la Comuna de San Sebastián del Sígsig no será por violar deliberadamente la Ley que están llamados a cumplir y a hacer cumplir, sino únicamente porque su falta de información les ha hecho suponer que “San Sebastián” fuera anejo del Sígsig, pero el Sígsig es, desde su remota fundación, SAN SEBASTIÁN DEL SÍGSIG, como Quito es San Francisco de Quito, y Cuenca Santa Ana de los Ríos de Cuenca.

En las citadas parroquias de Sígsig, Güel, Cuchil y Jima hay no menos de cuarenta y cinco caseríos principales, en los que se podría y debería organizar sendas comunas, si de veras se quisiera realizar obra social; bien que, conociendo la idiosincrasia de esa gente será excusado suponer que algún día vaya a cumplirse lo establecido en el artículo 3º del Estatuto Jurídico de las Comunidades: “Transformación de las comunidades en cooperativas de producción”. De todos modos, valdría la pena intentarlo, que afrontar el desafío es de funcionarios eficientes.

Nuestro país está comprometido a transformar “los injustos sistemas de tenencia y explotación de la tierra, con miras a sustituir el régimen del latifundio y minifundio por un sistema justo de propiedad” procurando que “*la tierra constituya para el hombre que la trabaja, la base de su actividad económica, fundamento de su progresivo bienestar y garantía de su libertad y dignidad*”. Pero ni la ley de comunas, ni la de reforma agraria, ni este compromiso solemne de los países en vías de desarrollo satisfacen a los integrantes de la Comunidad de Indios de San Sebastián del Sígsig, que justamente para eludir esas previsiones ha dejado de llamarse comunidad o comuna y ahora se titula *Gobernación de Indígenas de la Propiedad del Sígsig*... Así dizque les aconsejó el señor Abogado, para quien sólo cuenta la pitanza, sin que el Derecho le importe un bledo.

- ✦ 1809.- Pero dejémonos de dibujos y sigamos en comunión con viejos papeles, injuriados por el polvo secular, la humedad y el comején. Aunque el documento que traigo al corro no es prójimo de los que he transcrito y citado hasta aquí; es simplemente un documento curioso que, hace como cuatro décadas, me lo obsequió un campesino de Zhipir. Entonces, trabajosamente se adivinaba la fecha del manuscrito, reduciéndose el contenido a pu-

ras manchas; pero mis cuidados han conseguido que el documento se restablezca lo suficiente para regalar dos sabrosas páginas a quienes gustamos de lo añejo. Trátase de una escritura de venta en forma, aunque no ha sido otorgada en presencia de ningún cofrade del “ante mi y certifico”. Comienza: “*En el Pueblo de San Sebastián del Sígsig, perteneciente a la jurisdicción del Gobierno de la Ciudad de Cuenca, a los diez y ocho días del mes de octubre de Mil Ochocientos y nueve años. Ante Nos el Gobernador de Naturales D. Francisco Llanos y Regidores D. Mariano Duma y D. Mathías Ortega, y un testigo, parecieron presentes Sebastián Chuva y Tomasa Morocho, su legítima mujer, a quienes conocemos y certificamos que son indios oriundos y naturales de este mismo nuestro Pueblo...*”. Corto, preciso, modelo en su género este título de venta, en buen castellano, con linda caligrafía y correcta ortografía, y hasta con los latinajos surtidos con parsimonia, que solamente escribanos doctos empleaban en actos y contratos de esta naturaleza. La cito únicamente con el propósito de relieves que esta pieza notarial de Zhipir, obra de D. Santiago Torres que la suscribe como testigo, es de todo en todo el reverso de las piezas bastardas que ha protocolizado la comunidad de indios del Sígsig, y que han sido fabricadas unos lustros más tarde.

- ✦ 1812.- En 1820, las colonias de España en América se hallaban en franca convulsión; de todos modos, el rey de España, para evitar cualquier duda y deseando expresar más su voluntad en cuanto a “*dispensar una decidida protección y amparo a los indios en toda la España ultramarina*” mandó se guarde, cumpla y ejecute el decreto de las Cortes, del 9 de noviembre de 1812, aboliendo las mitas o mandamientos, o repartimientos de indios y cualquier otro servicio personal. En lo tocante a tierras, el artículo 5º del expresado decreto disponía: “Se repartirán tierras a los Indios que sean casados, o mayores de veinte y cinco años, fuera de la patria potestad, de las inmediatas a los pueblos, que no sean de dominio particular o de comunidades; mas si las tierras de comunidades fueren muy cuantiosas con respecto a la población del pueblo a que pertenecen, se repartirá, cuando más, hasta la mitad de dichas tierras, debiendo entender en todos estos repartimientos las Diputaciones provinciales, las que designarán la porción de terreno que correspon-

da a cada individuo, según las circunstancias particulares de éste y de cada pueblo”.

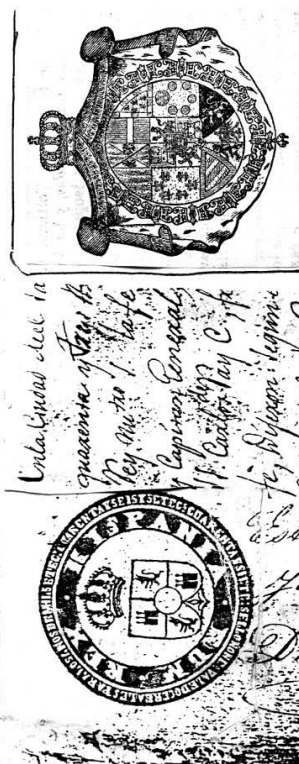
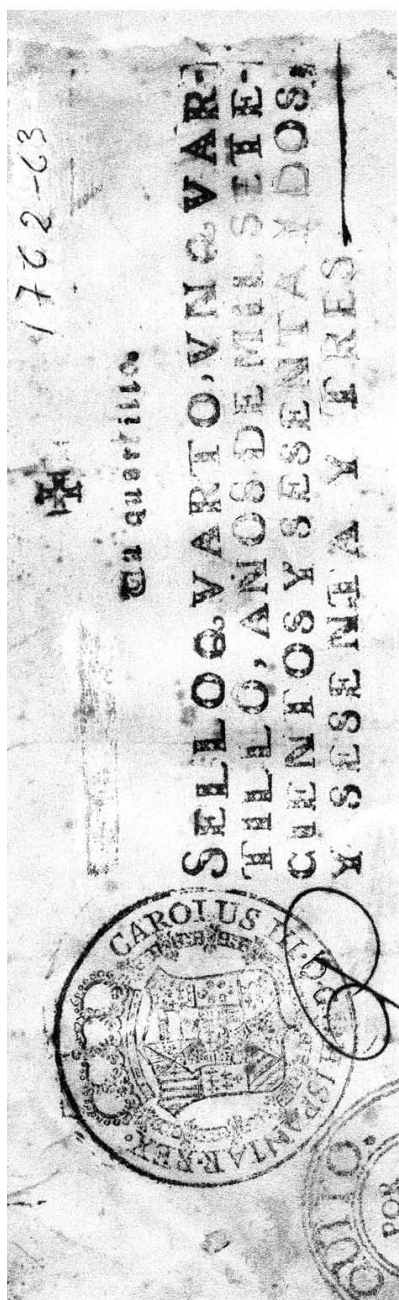
Basta ya de requilorios y vamos a lo que vamos; es decir al examen y pepitoria de los instrumentos que envanecen a los indios de la comunidad de San Sebastián del Sígsig. Llevaré el gato al agua, aunque la verdad les sepa a los interesados a rejalgar con vitriolo.

III

PIEZAS DE
CUÑO FALSO

Queda demostrado que la Comunidad de Indios del Sígsig jamás pudo tener ni tuvo el dominio de las tierras que fueron asignadas a partir de su erección, sino únicamente la ADMINISTRACIÓN y el USU-FRUCTO de ellas. La ciencia del Derecho establece la diferencia entre mero tenedor y poseedor, y precisa que la posesión no depende únicamente del ANIMUS de comportarse como dueño y señor del bien, sino sustancialmente del TÍTULO por el cual se lo detenta, pues éste asegura la solidez del derecho, sustrayéndolo a las veleidades del interés privado. En esta razón, para dilucidar si dicha Comunidad se halla o no amparada en la posesión de las tierras que ocupa, lo procedente es que pasemos revista a sus títulos de propiedad.

Cuando el Sígsig gestionaba su cantonización, antes de 1861, los indios de la Comunidad fueron sorprendidos dolosamente en Gualaceo con documentos fabricados allí mismo con el propósito de convencerles de que sólo Gualaceo tenía que ser cantón, y que el Sígsig debía depender siempre de él. A pesar del movimiento indígena a favor de esa tesis, Sígsig se independizó de Gualaceo en 1861 y se constituyó en parroquia de Gualaquiza, hasta que el 16 de abril de 1864 fue elevado a cabecera cantonal, si bien a los pocos años volvió a formar parte de Gualaceo. Así permaneció hasta que se convirtió en foco principal de la **Restauración**, esto es de la campaña contra la dictadura de Veintemilla, y sus moradores pugnaron por el restablecimiento del cantón; mas, para oponerse a tal proyecto, la Comunidad de Indios del Sígsig proto-



Arriba membrete xilográfico de un papel auténtico del sello cuarto, de un cuartillo, que se empleaba en tramitar los asuntos de indios. A la izquierda el sello fotografiado del falso "título" de la Comunidad de Indios del Sísig, en el que se destaca un rídículo escudito supuestamente de España, que no concuerda con el escudo de la xilografía ni con el que se reproduce a la derecha. El fotografiado es una imitación del papel sellado de 1835, aunque en el exergo dice ser de 1746-1747, de doce reales, en el que se redacta un escrito de años anteriores (1743-1744).

colizó en Gualaceo, el 7 de marzo de 1882, en la escribanía de D. Fidel Piedra, los documentos expresados; pese a lo cual, Sígsig se independizó definitivamente de Gualaceo el 24 de enero de 1883. De modo que, antes de 1861, y luego de 1862, los indios de la Comunidad jugaron el papel de tontos útiles al servicio de los intereses de Gualaceo.

Durante la presidencia del Dr. Antonio Flores Jijón, quien optó entre sus acertadas medidas de carácter económico por una seria revisión de los catastros de predios rústicos, los indios de la comunidad protocolizaron, el 11 de enero de 1889, en la Oficina de Anotaciones del Sígsig, bajo el número 45 del Registro de Propiedad, un documento fechado el 5 de abril de 1743. El empeño de protocolizarlo, se deduce fácilmente, fue el de curarse de salud y evitar la reversión del latifundio que hasta hoy detenta; y, de paso, levantar un avispero contra el Vicario del lugar.

A todas luces, el documento protocolizado en el Sígsig fue el primero de la serie, tanto por su fecha más antigua, cuanto porque al fabricarlo se guardaron ciertas apariencias como el uso de papel sellado, el concurso de un dibujante autor del sello y de las firmas suplantadas, y otras chirigotas que encandilaron a los indígenas. Una vez ganada la voluntad de las víctimas, las demás piezas han salido tan fácil como coser y cantar, sin que se haya cuidado apariencias en el fondo ni en la forma. En las diferentes piezas se ha empleado escritura ora vertical, ora inclinada, ora invertida, pero este recurso no puede ocultar que todos esos tipos de letra son de la mano de Juan María Gomes de Andrade, cuyos escasos talentos no le ayudaron para fingir la caligrafía ni menos la ortografía del siglo XVIII. Este sujeto no entendió de la misa la media lo relativo a abreviaturas, capítulo importante de la paleografía, ni acertó a interpretar ciertos vocablos de los documentos molde, que seguramente tuvo a su disposición en la escribanía de Antonio Sevilla.

Quienes nos quemamos las pestañas en la consulta de infolios cargados del polvo de siglos, fácilmente diferenciamos un documento genuino de uno de embeleco; por ello aseguro enfáticamente que las pruebas aparejadas por la Comunidad de Indios de San Sebastián del Sígsig son falsas por el lado que se las mire. Ya dije algo sobre la forma

de tales papeluchos, pero es su contenido el que revela, con claridad meridiana, la patraña y vil fraude. Punto con el introito y el grano.

El documento protocolizado en el Sígsig consta de cinco páginas de escritura. La primera luce en la esquina superior izquierda un raro sello circular de 45 mm de diámetro, de impresión moderna, con un supuesto escudo real al centro y un exergo de dos bandas de escritura; la externa dice: SELLO NONEs VALE DOCE REALES PARA LOS AÑOS DE MIL SETECs CUARENTA Y SEIS Y SETECs CUARENTA Y SIETE; y la interna: HISPANIARUM REX. Por cierto, no concuerda este sello con las xilografías de la época, pues se trata de un grabado en metal propio de las técnicas modernas. No se declara a qué *Hispaniarum Rex* se refiere, cuando obligadamente debía constar el nombre del monarca reinante que entonces lo era Felipe V, primer Rey de España de la casa de Borbón, aunque quien realmente gobernaba desde 1724 era su segunda mujer Isabel de Farnesio. Todo indica que el papel se imprimió aposta para la contrahechura; y, en el supuesto no aceptado de que fuese auténtico el papel, su valor no corresponde al usual para el trámite de asuntos de indios, quienes eran reputados menores de edad y no causaban derechos; pues se cursaban en papel del sello cuarto de un cuartillo y jamás en papel de doce reales, esto es de tres pesos. En papel de 1746 se registra un hecho que supuestamente se actúa en 1743. Aparte de lo cual en esos años no se conseguía de angas ni de mangas papel sellado de ninguna denominación, sea porque no llegaba el cajón de España, sea porque el cambio de administración virreinal produjo demoras; por ello, desde 1739 se estuvo validando papel sobrante de años anteriores. En 1746, advino al trono un nuevo rey y, naturalmente, no habrá llegado a las colonias ultramarinas papel sellado de ese año. El Dr. Carrión Merodio, por la protección de unos indios Duchipulla obtuvo real provisión en 1747, y en su trámite vemos que se empleó papel de 1735-1736 y 1713-1714. En 1748 ya circuló papel sellado válido para los años de 1747-1748. Nótese de camino, aunque no existió norma al respecto, que en esa época los dos años de validez del papel sellado el primero es impar y el segundo par, al revés de lo que se observa en el sello impreso en el título de la comunidad.

También los folios siguientes, cosa no acostumbrada, sino en las cartas de amor, llevan en el margen superior izquierdo un adorno (no

puede llamarse sello) consistente en un círculo de 22 mm de diámetro que encierra el busto de un monigote de perfil, copia a línea (aunque es extraño) de la figura en bajo relieve de la moneda de 2 stuivers de la Guayana Holandesa, emitida en 1809. Atrás de la figura hay una *Cy*, en frente de ella: *II-DC*. En la mitad inferior de la quinta página se repite el sello de la primera, pero tachadas con tinta y compás (subsiste el orificio de la aguja de éste) las dos franjas de escritura del exergo; ardid practicado para sustituir el sello frío que se adhería en los documentos genuinos y que los falsificadores no lograron conseguir.

En el texto hay un tufillo a real provisión y es de suponer que algún documento auténtico de 1746 habrá servido de molde. Comienza de este modo peregrino: *“En la ciudad deel San Francisco deel Quito, a Cinco de Abril de Mill Setecientos quarenta y tres años: en audiencia de relaciones ante los SS. Villamil y Tapia deel Rey Ntro S. la fe esearucez (sic) Doctor fernando Sánchez de Orellana Presidente, Gobernador y Capitán General y oydores de ella, y el Protector General de los Indios se Presentaron los SS. Carlos de Ray C., francisco de Rayo S. Recidentes de Santa Fe, mayor de edades, de que damos fe, dijeron...”*.

Al analizar sólo estas pocas líneas del comienzo, la patraña se pone de bulto entero. El Presidente Sánchez de Orellana se posesionó en 1745, como expuse ya, y mal puede figurar actuando como tal en 1743. Los Señores Villamil y Tapia no son dos personas distintas, sino un solo D. Patricio Antonio Villamil y Tapia, funcionario del Supremo Tribunal de Justicia por más de medio siglo, pero precisamente en 1743 no sirvió de escribano ni de secretario de Cámara, pues mientras duró el interinazgo presidencial al que me referí en el parágrafo anterior, D. Manuel Rodríguez de la Parra se desempeñó, todo en uno, de Secretario, Escribano, Registrador y Chanciller.

Al pie de una provisión, y de ningún modo al comienzo de ella, se sentaba una razón como ésta, que la copio de un documento genuino de 1747: *“Yo, Dn. Patro Antº Villaamill y Tapia Sº del Rey Nro Sor la fice escribir por su mandado y con acuerdo de su Presidente y Oydores”*. Donde el falsificador leyó *“la fe esearucez”*, palabras sin sentido, el documento molde diría, *“la fice escriuir”*. Los Secretarios y Escribanos de Cámara debían poner esa razón en todo documento li-

D.ª Juana Luzero, Natural de este P.º de Guadalupe, Cacique
 de la Parcialidad de Paigurara y Toctesi, Viuda de Don Pedro Saquicaray
 cacique Principal que fue de dicha Parcialidad de Toctesi, P.º
 hereditario de Don Mathias Saqui Carai y de Doña Juana Duma Cacica
 de Línea Recta y Principal del P.º del Siglo, Nieto hereditario de Don
 Rodrigo Saqui Carai, pedida la Venia parezca ante Vmd. por su propio personal
 por ausencia del Protector de Guadalupe, en nombre de Don Salvador
 Saqui Carai mi hijo Legítimo y de don mi marido, y en aquella vida...

El cacicazgo equivalía al mayorazgo de España de modo que no podía ser cacique cualquier hijo de vecino sino indio de limpia sangre, primogénito, descendiente por línea recta de caciques. En los títulos de la Comunidad se presentan como caciques del Siglo unos mestizos santafereños, hijos de españoles, de ingleses (?) en donas del Siglo. En el documento reproducido arriba puede verse como la cacica Luzero expone el derecho de su hijo al cacicazgo: "Doña Juana Luzero, Natural de este Pueblo de Guadalupe, Cacica de las Parcialidades de Paigurara y Toctesi, Viuda de Dn. Pedro Saquicaray, Cacique Principal que fue de dicha Parcialidad de Toctesi, hijo legítimo de Dn. Mathias Saquicaray y de Doña Juana Duma Cacica de Línea Recta y Principal del Pueblo de Siglo, nieto legítimo de Dn. Rodrigo Saqui Carai, pedida la venia parezca ante Vmd. por mi propia persona por ausencia del Protector de Naturales, en nombre de Dn. Salvador Saqui Carai, mi hijo legítimo y de dicho mi marido, y en aquella vida..."

brado para fuera de las cinco leguas: Los escribanos “no las den sin mandato del Presidente y Oidores”. Tal disposición no se ha observado en la confección del **título**, como tampoco esta otra: “Todos los escribanos sean obligados a poner y pongan en las espaldas de las provisiones y cartas que se libraren sus derechos y los del sello y registro que han de haber por ellas”.

Como caciques del Sísig se presentan los Señores Carlos de Ray y Francisco de Rayo, que en los mamotretos protocolizados en Gualaico se nombran Carlos Coraga y Francisco Panamá, santaferños, hijos de caballeros españoles o ingleses en doñas del Sísig. La ley 5, tit. 7, L. V mandaba “**que los caciques NO SE TITULEN SEÑORES**” y la ley 6 de los mismos título y libro: “**que los caciques no sean mestizos**”. Para optar a un cacicazgo el indio probaba ser primogénito de cacique, nieto de cacique, bisnieto de cacique, remontando su genealogía hasta la gentilidad, y que tales antecesores fueron, ciertamente, oriundos del lugar, “de limpia y noble sangre”. ¿A quien se le ocurre que un par de santaferños, hijos de caballeros españoles o ingleses asomen sin más ni más de caciques del Sísig, representando a la comunidad en negocio de tanta monta? A la legua se ve que la cosa no pasa de cuento, para tragarse la riqueza de los indios.

Adviértase de paso que el uso de quichusmos, cañarismos, acepciones locales de voces castellanas, etc., delatan que esos fabulosos títulos fueron fabricados en el Azuay; términos como *guanglla mitayo*, *chaso*, *polvo* (?), *rústico* en el sentido de sujeto de baja estofa, *catalán*, etc., son inadmisibles en el texto de instrumentos públicos como una real provisión o una escritura de compra venta; tanto más que funcionarios y escribientes del más alto Tribunal de Justicia eran españoles o criollos cultos, no familiarizados con las *catalanerías* de *chasos* de aldea empleadas en las piezas que están en tela de juicio. Al respecto, me permito una digresión: Carlos J. Córdova, en su Vocabulario, usado en la industria del tejido del sombrero de paja toquilla, define al *chaso* como “campesino del sur del Ecuador, en la Sierra, habitante de las provincias del Azuay y Cañar, generalmente propietario de una pequeña finca y su condición social, económica y estado cultural es superior a la del indio. El nombre de *chaso* corresponde al varón y *chola* a la mujer”.

Fiscal Protector de Naturales no lo fue, en 1743, el Dr. Gerónimo de Carrión y Merodio, como aparece en los expresados papeles de la comunidad, sino el Dr. Luján. Así lo registra la historia, y así consta en las informaciones ofrecidas ese mismo año por D. Phelipe Duma, cacique del Sísig, y D. Pedro Duma, cacique del Sísig y Alcalde Mayor en Cuenca. Estos dos indios hubieran sido, por otra parte, en caso de autenticidad del hecho, los llamados a representar a la comunidad en 1743, y no los tales Rey y Rayo.

Los vicios legales, anacronismos, incongruencias y más defectos aparecidos en un somero análisis de solamente las primeras líneas del “título” protocolizado en el Sísig, prueban relevantísimamente que tal pieza es de cuño falso y, por consiguiente, de ningún valor. El fautor del embeleco ha tenido a su alcance alguna provisión de 1746 y no cayó en que al trasladar nombres y circunstancias a 1743 incurría en dislates de a puño. ¿Pero a quien iba a importar alifafes tamaños, si los indígenas engatusados no entendían palote de historia ni de leyes? Un documento así fabricado es nulo, de nulidad absoluta, y no puede producir efectos jurídicos en ningún tiempo, pues, como se dice en Derecho: “*quod nullum est nullum producit effectum*”; y como la nulidad opera *ipso jure* no hace falta declaración judicial al respecto. “Las partes que han efectuado un negocio nulo y sus causahabientes –afirma Coviello– pueden obrar como si el negocio no se hubiese efectuado y considerar únicamente la condición jurídica que preexistía a tal celebración sin necesidad de recurrir al magistrado”.

A los desbarros que arriba se anotan, sigue una tiramira de locuciones sin sentido, arrastradas por los cabellos; disparates de tomo y lomo que, hilvanados a guisa de antecedentes, trasuntan una burla sangrienta de las víctimas: “*Que el Pueblo de San Sebastián del Sísig ha sido en el puerto de la entrada de las jibarías de Sangurima y Gualaquiza, y de todo Indios Rústicos, entre los cuales ha habido más que dos chasos zambos y romos, unos Arévalo de Buele y otros Samaniego de Buele...*”. Unos y otros en plural no pueden sumar sólo dos, pero los falsificadores nunca aciertan con género, número ni caso. Sigue la jerigonza para proclamar, sabe Dios porqué, los pueblos de San Bartolomé y de San Juan han sido de indios más rústicos todavía.

En este punto los fraguadores de tan extrañas pruebas se traicionan inconscientemente y dejan asomar el hilo del ovillo en cuanto a la verdadera época de los “títulos”, pues el *chaso zambo y romo Samaniego de Buele* fue hombre de carne y hueso, nacido en 1812. (Los indios del Sígsig usan hasta hoy la partícula *de* en vez de la *y* copulativa al yuxtaponer los apellidos paterno y materno). He aquí lo que dice la partida de bautizo del sujeto en referencia, tomada del Archivo Parroquial del Sígsig: “*Mestizo.- En el año del Señor: a los 22 días del mes de mayo de 1812 años. Yo el Tnte. Cura de esta Snta. Iglesia del San Sebastián del Sígsig: Bauticé solemnemente, puse los santos óleos y crisma a Manuel del Espíritu Santo, hijo natural de Pedro Samaniego, Español, y de Pía Buele india del quinto; fue la madrina Martina Buele... f) Fray Ramón Piedra*”.

Para ser tomado en cuenta, este Samaniego de Buele debía frizar por lo menos en los 18 abrilés, lo que ocurrió cuando el Ecuador se desligó de la Gran Colombia, en 1830. A propósito, la Comunidad de Indios del Sígsig guarda copia de una diligencia realizada en Ramosapana el 21 de febrero de 1831, cuya redacción tiene absoluta similitud con el estilo pedestre de los títulos de la Comunidad, suscrita por Juan Gomes de Andrade, Manuel Marcos Samaniego, Antonio Dávila y Bartolomé Maldonado, ante el escribano Antonio Sevilla. Muy ciego será quien no vea por tela de cedazo que en esta nómina constan los fautores de los pecaminosos “títulos” de la Comunidad de Indios de San Sebastián del Sígsig, y por lo tanto los beneficiarios del oro y las esmeraldas escamoteados a los pobres indios ignorantes...

Continúan los *antecedentes* para la provisión de un continente de tierras a la comunidad sigseña: “*y demás Indios dichos Alcaldes Guangllas-Mitayos, también que han sido Envidiosos, Ambiciosos, odiosos Provocativos contra los demás hermanos Indios, y siendo el más Indios mala casta de malas naciones* (no había sino dos clases de indios: **oriundos**, naturales, encomendados o quintos, y **forasteros**, peínadillos o de la Real Corona; unos y otros tan vasallos del rey como los propios españoles. Lo de “mala casta”, “de malas naciones” conviene al léxico de verduleras y no de curiales) *y ostentosos también de sus empleos inútiles. (...) siendo incapaces e indignos del sacerdocio los indios, los negros y los chasos bajos*”. ¡A un cuerno San Martín de Porres y toda la legión de indios, mestizos y negros que abrazaron la carrera eclesiástica y que lle-

garon a ilustrar la iglesia americana como buenos! ¿Ha de haber paciencia que se estampe tan torpe afirmación en una escritura de compra venta? Estaba mandado que las Comunidades de indios dispongan de caja propia, y que una parte de la Caja de Comunidades se destine al mantenimiento del Seminario de Indios (ley 15, tit. 4, L. VI). Se dictaron cédulas reales, afirma un ilustre comentarista versado en cosas de indios, el Dr. Alfonso M^a Mora, “nivelando a los caciques e indios mestizos con los españoles para la obtención y ejercicio de las más altas dignidades y cargos eclesiásticos y civiles, a que sean atendidos, favorecidos y honrados como los demás vasallos de la Corona”. ¡Vaya falsificadores torpes! No se les vino al magín que para engañar se requiere más talento que para andarse a derechas, pues más pronto se coge al mentiroso que al cojo.

No embargante el cardumen de disparates que sazonan los supuestos títulos, se ha pretendido dar caracteres reales a hechos carentes de juridicidad de los cuales, por obra de la falsedad, no pueden brotar sino relaciones jurídicas fingidas.

Según esos títulos, los indios de la comunidad del Sígisg suponen que obtuvieron la asignación de un territorio inmenso, no en virtud de su espíritu de trabajo, ni de su fiel observancia de las leyes, ni de su conducta ejemplar, ni de sus servicios a la Corona, sino por ser indios rústicos, vecinos de los jíbaros, envidiosos, ambiciosos, odiosos, provocativos, malacastas, de malas naciones, ostentosos de sus empleos inútiles, indignos del sacerdocio, y otras pestes; pues a renglón seguido de semejante faramalla, el documento prosigue: “*Por lo que el Rey* (Imaginémonos a Felipe V atravesando mares, selvas y tremedales para estampar su real firma en la escritura de una venta hecha a indios de la calaña que les pintan los antecedentes!) *su Presidente y Oydores de ella* (¿Cuál ella si en ningún momento se menciona a la Real Audiencia?) *y el Protector General de los Indios, impuestos por las observaciones del Corregidor y de los Conquistadores* (Burla tras burla: ¡Conquistadores en 1743, cuando dos siglos antes ellos ya habían pasado a la historia!). *Conforme a efecto con la ley signan firman y dan toda la inmensa reducción del Pueblo entero y la mayor extenciones de los Citios de Amorgeo, Molón, Portada y fasayñán. (...) en Título de Benta Pública a toda la Co-*

munidad de indios de Duma y Burín deel Pueblo deel Sígsig (...) que ahora presente consta sólo Veinte Indios habitantes de ese Pueblo...” En mi archivo existe de aquel entonces un padroncillo de mitayos quintos, entre los 18 y 50 años de edad, que pagaron en efectivo para no servir las mitas de tamberos, oyaricos y semaneros, los cuales suman 35 de Burín y 45 de Duma. Si a estos 80 mitayos se añaden los varones mayores de 50 y menores de 18 años, las mujeres de toda edad, y los indios que, por no disponer de dinero para redimirse de las odiosas mitas, se habrán resignado a servir las, tendríamos una población varias veces mayor que la señalada en el documento de marras. En el Apéndice reproduzco el padrón de indios de 1756: 102 de Duma y 35 de Burín.

Y aquí viene el intrínquis, el condumio, el **quid** de esta farsa nunca vista ni oída, la verdadera madre del ternero: **“Para Gobierno y Cabeza de esas parroquias de los indios.....”** (En 1743 el Sígsig no era parroquia sino pueblo; transformándose en parroquia civil hacia 1785, y en parroquia eclesiástica el 7 de mayo de 1790. El cacique del Sígsig Don Eusebio Duma, el 9 de noviembre de 1789 expuso a la Real Audiencia que mientras su *pueblo* era anejo de Gualaceo los caciques eran a la vez gobernadores; pero que, desde que se erigió en *parroquia* el administrador de reales tributos D. Martín Coello y Piedra, de propia autoridad, ha separado el gobierno del cacicazgo y ha nombrado de gobernador a un indio forastero llamado Francisco Llanos, entregado con extremo al vicio de la embriaguez, de forma que enajenado abandonaba continuamente la Doctrina, cometiendo pecados públicos sumamente abominables.) **“Para Gobierno y Cabeza de esas parroquias de los indios ordenamos con todo el poder y Autoridades que aquel pueblo de la Señoría deel gualaceo solo se poble en cualquier tiempo de Cantón Villa y el Corregidor de este cantón de la Villa de Gualaceo, execute y cumpla y haga cumplir en todo y por todo a cualesquiera de los tenientes indios de esos pueblos de indios, y entregando.....”**

Antes de 1820, *pueblo* se designaba la parroquia de indios y *parroquia* era el pueblo de españoles, pero en este bendito “título”, por ignorancia, se hace un champuz de todo. Así mismo, Gualaceo se escribe con (c) a partir de 1824, pues su grafía anterior era Gualaxio, Gualagio, Gualageo; solamente a partir de ese año Sígsig también fija su grafía actual, pues antes era Siquesique, Sice, Sigse, etc. El empleo de tales gra-

Companza echa de tanto de la Parciali-
dad de Duma, q' Vicas en el Lamo ge-
nito D^o Nafún Duma, q' Coben dos de
El año de setecientos treinta y tres, has ta el
enue de trenta y siete de este presente.

Tamberos.

Que ampagado fues primo genito,	
<u>Quemaram</u>	
Quemario mascho, Vp ^o	1p ^o
Guabiel quitanvaguí, diez ad.	1p ²
Juan mascho, diez ad.	1p ²
Manuela Caspió, diez ad.	1p ²
Galbino Elloa, diez ad.	1p ²
Matthías del Caspió, Ciego diez ad.	1p ²
Hamansilla Sagway, diez ad.	1p ²
Abonío Sanchez, Ciego diez ad.	1p ²
Julián Cusá, diez ad.	1p ²
Juan Garçon, diez ad.	1p ²
Matthías Haros, diez ad.	1p ²
Abonío Chugui masca, diez ad.	1p ²
Manuel Danga, diez ad.	1p ²
Juan Yumbo, diez ad.	1p ²
Juan Macu, Beynte ad.	2p ²
Juan Sactama, diez ad.	1p ²
Bisente Sanchez, diez ad.	1p ²

Semaneros

Clemente, mascho, diez ad.	1p ²
Quemario Danga, fue en persona.	
Thomas Chusca, fue en persona.	
Mariano Buela, p ^o en mas, dio Beynte ad.	
Carlos Buela, fue en persona.	
Pedro Danga, Vio diez ad.	1p ²
Manuel Miri chusca, Vio diez ad.	1p ²
Manuel Haros, Vio diez ad.	1p ²
Juan Sactama, Vio diez ad.	1p ²
Mariano Sactama, Vio diez ad.	1p ²
Juan Haros, Vio diez ad.	1p ²
Marco Buela, Vio diez ad.	1p ²
Dos qual Buela, Vio diez ad.	2p ²

D^o Nafún Duma, Vio diez ad. — 1p²
Bonifacio Buela, Vio diez ad. — 1p²

Semaneros de pago de Alacali

Medcha Chusca, pago diez ad.	1p ²
Bonifacio Sagway, pago diez ad.	1p ²
Quemario Danga, pago diez ad.	1p ²
Matthías Buela, pago diez ad.	1p ²
Quemario quitanvaguí, en persona.	
Mariano quitanvaguí, en persona.	
Mariano Nadan, pago diez ad.	1p ²
Joseph mascho, pago diez ad.	1p ²
Joseph Sactama, pago diez ad.	1p ²
Bernardo Haros, pago diez ad.	1p ²
Luiso Buela, pago diez ad.	1p ²
Andrés Buela, pago diez ad.	1p ²
Bisente Buela, pago diez ad.	1p ²

Los falsos Títulos vendidos (esos papeles, no las tierras) a la Comunidad de Indios del Sigsig por almudes de oro y esmeraldas, afirman que los indios de DUMA y BURIN, las dos parcialidades de Sigsig, son sólo VEINTE. En estas dos páginas auténticas constan las listas de tamberos, oyaricos y semaneros de esas dos parcialidades, comprendidos entre 18 y 50 años de edad, que suman 45 de DUMA y 35 de BURIN y sólo constan los que pagaron para no servir las odiosas mitas; los que no disponían de dinero para ese pago, así como los menores de 18 y mayores de 50 años, y las mujeres sumarian muchos indios más. Según estos pliegos, cacique de DUMA fue don Xacinto Duma, y de BURIN Don Domingo Sánchez, ambos primogénitos.

En el Apéndice se publica una nómina más completa.

Francisco de la Pascualidad de B. ⁷¹
 y los alabados. In Domingo Sanchez, A
 Domingo Lario Zúñiga, donlos púncos

Maria Quadros, Vió D'us ad.	1p ²
Manuel Basques, Vió D'us ad.	1p ²
Manuel Branco, Vió D'us ad.	1p ²
Guliana Angelo, Vió D'us ad.	1p ²
Juan Montez de la, Vió D'us ad.	1p ²
Cyprian Mexoch, Vió D'us ad.	1p ²
Andres Lora, Vió D'us ad.	1p ²
Antonio P. N. Xalao, Vió D'us ad.	1p ²
Da Rita Salinas, Vió D'us ad.	1p ²
Louise Gadiab, Vió D'us ad.	1p ²
Fernando Anay, Vió D'us ad.	1p ²
Manoel Basques, Vió D'us p ^o do ad.	1p ²
Maria da G. Mendes da, Vió D'us ad.	3p ²
Catholina Basques, Vió D'us ad.	1p ²
Letizia Castro, Vió D'us ad.	1p ²
Nabuc. Abadiga, Vió D'us ad.	1p ²
Sanctissima, pag ^o Santo ad.	1p ²

De J. J. de Vries

Bernardo Peltan, pago 8 úrs. ad. — 1^o 2
 Mariano Pinán, pago 8 úrs. ad. — 1^o 2
 Marceño Uagui nautla, pago 8 úrs. ad. — 1^o 2
 Pedro Uagui nautla, pago 8 úrs. ad. — 1^o 2
 Raymundo Gomez, pago 8 úrs. ad. — 1^o 2
 Mariano Uagui nautla, pago 8 úrs. ad. — 2^o 4
 Leonardo Uagui nautla, pago 8 úrs. ad. — 2^o 4
 Fr. P. J. Arcus, pago 8 úrs. ad. — 2^o 4
 Manuel Pin. Uagui nautla, pago 8 úrs. ad. — 1^o 2
 Mariano Pidlá, pago 8 úrs. ad. — 1^o 2

Penaeus

Joseph Aguilar, Lago Volcan — 1 p^o 2
 Carlos Amay, Lago Volcan? — 1 p^o 4
 Agustin Moreno, Lago Volcan — 1 p^o 2
 Luis Cameroa, Lago Volcan — 1 p^o 2

Maria Magli, Lago Tovel — 1/2
 Leo Paloma, Lago Tovel — 1/4
 Raula Lata, Lago Tovel — 1/4
 porofo de Ynacio Duché — —

Con Ruba todas las minutas e
cha de todos los nominados. Con asis-
tencia de los Alcaides Mayores que
nos se les ficaron en qual quier tien-
po, Como queda consta todo lo pre-
cedido en este pue. Y para lo qual
les emandado lo firmen y lo firmen
con Con asistencia de sus Alcaides
Mayores en el Pue. el día 15 de
nubienias del mes de Mayo de mil
setecientos ochenta y siete años. y por
fi. Leon no sabe leer ni escribes
Santiago lo firmo vno de otros los
dos y lo firmo. Rafael Benaví-
des y el Alguacil mayor D. N. de
los de Molina y mal donado.
D. R. Alcaide de Molina

F. R. Phaul
Benavides

Josep Tallantire
Alguazil mayor

fías modernas en los títulos de la Comunidad es otra prueba de que éstos se forjaron después de 1824.

Desde la mitad del título, el concepto arriba expresado se repite como estribillo, con nuevos adornos y con sandeces de mayor enjundia: “...para que en cualquier tiempo cualesquiera otros Réyeses, sus Presidentes y Oydores, Curas y personas forasteras de cualquier calidades y condiciones que sean, o cualesquiera de aquellos indios contrarios, no lo intenten ni traten poblar de cantón Villa el expresado pueblo *parroquia de los indios*”.... “si cualesquiera otros Réyeses, Presidentes, Oydores, Curas y personas de cualquier calidades y condiciones que sean; y si salieren poblando de cantón el expresado pueblo *parroquia de los indios* (...) o quitando o cuartando los Gastos del Consejo Real de su Magestad, o el dominio del cantón de la villa de Gualaceo, poniendo pretexto, engaño o embarazo alguno, bajo apercibimiento de causa sumario, que se obligarán a restituir el Pueblo a la felicidad de su primer estado”... “y el círculo deel Pueblo de los Indios fijado en este Título de Benta Pública, y los Gastos deel Consejo de su Magestad, y el dominio deel Cantón de la Villa deel Gualaceo”... La esencia, pues, de semejante mamotreto no es la venta de tierras ni cosa parecida, sino forjar la idea de que el Sígsig tenía que permanecer sujeto a Gualaceo; a tal punto que se amenaza con juicio sumario a cualesquiera “réyeses” que se atrevieran a elevar al Sígsig a la categoría de cantón. Amenaza corta, por cierto, si conocemos por leyendas y tradiciones que abogado hubo en la colonia que se prestó a entablar juicio contra Dios, y por materia más baladí que el ascenso político administrativo de un pueblo.

En la colonia, el territorio se dividía políticamente en ciudades, villas y lugares. En la Gran Colombia, 1824, se promulgó la ley de división territorial que crea Departamentos, Provincias y *Cantones*, facultando a éstos a erigirse, previa solicitud, en *Villas*. Por tanto resulta anacrónico que se hable del CANTON VILLA de Gualaceo en un documento de 1743. Presumo que Sígsig, no queriendo ser menos que Gualaceo, Cañar, Girón y otros pueblos ascendidos a cantones, estaría también gestionando su cantonización, cosa que Gualaceo miraría con ojos turnios puesto que Sígsig era su baluarte económico para subvenir las impensas del desarrollo seccional; funcionarios gualaceños aprovecharían entonces de una oportunidad cualquiera para disponer, mediante

la factura de títulos apócrifos, “*con todo el poder y autoridades*”, que Síg-sig no cambie jamás de rango. Seguramente los autores, cómplices y encubridores del hecho alimentaron la idea de que los indios sigseños, halagados con títulos fabricados a la medida de su paladar, no consentirían que los demás vecinos del lugar moviesen un dedo por sacudirse de la tutela de Gualaceo. En verdad los indios, en goce de las libertades que trajo la independencia política volviéronse alevosos, insolentes y filateros, constituyendo un eficaz instrumento manejable para bien o para mal.

En lo tocante a que Gualaceo tuviese, por 1743-1744, “*Corregidor que execute, cumpla y haga cumplir*” la orden de que Síg-sig no se atreva a cantonizarse, es afirmación, desnuda de fundamento. Ciertamente que en el país se establecieron los *corregimientos de indios*, que resultaron una catástrofe y apenas si funcionaron algunos en Loja. Yo no he hallado referencia alguna de que en Gualaceo hubiese funcionado alguna vez un corregimiento de indios. Si a la autoridad cantonal, actualmente jefe político, a comienzos de la república se le llamaba **corregidor**, es otro cantar. Entre los cargos de “*El Quiteño Libre*” contra el gobierno de Flores consta el de “violencia, brutalidades y extorsiones de algunos militares que eran gobernadores de provincia o **corregidores de cantón**”, según Robalino Dávila. Tanto la Constitución política de 1835, como la de 1843, en el Título referente a la Administración Interior, establecen que “cada cantón, o la reunión de algunos de ellos en circuito, por disposición del Poder Ejecutivo será regido por un Corregidor”. En 1843, bajo la presidencia de Flores, se dictó la primera Ley Orgánica de Hacienda, en la cual aparece que existían, para el cobro de impuestos, corregimientos en Quito, Quijos, Latacunga, Ambato, Ibarra, Otavalo, Esmeraldas, Macas, Guaranda, Alausí, Cuenca, Azogues, GUALACEO, Loja, Zaruma, Guayaquil y Chimbo. Nótese bien: en 1843 y no en 1743.

De suponer sería que el trabajito de fabricar esos títulos para la comunidad de indios del Síg-sig se hubiese realizado *gratis et amore*, sólo por servir a los intereses de Gualaceo; pero no hubo tal, que por la plata baila el perro y sirve el gato de guitarrero. Lo peor es que los *paganini* resultaron los propios indios de esa comunidad, que sufragaron nada menos que cincuenta libras de oro fino, según el título que anali-

zo, y una arroba de oro del inca y una arroba de esmeraldas, de acuerdo con los papeles protocolizados en Gualaceo.

“*Confiesan tener apercebidos cincuenta libras de oro fino en la Caja Real del Rey Nuestro S., del caudal propio de los SS. Carlos de Ray Francisco de Rayo*”. Ni el término *apercebidas*, ni su parónimo *percibidas* tienen la acepción que se pretende: consignadas, depositadas o, más exactamente, usando un vocablo de la época, **enteradas**. La confesión de parte interesada no hace prueba, y menos al tratarse de sumas tan cuantiosas. Dentro de la minuciosidad controladora del sistema colonial español, cada asiento en los **libros del Tesoro y Contador** llevaba la firma de todos los funcionarios respectivos; así como todo depósito de dinero o de lingotes se hacía en presencia de todos ellos y las comunicaciones eran firmadas por todos los que intervenían en la operación. Esas cincuenta libras de oro fino ¿provenirían del caudal propio de los tales Rey y Rayo? ¿Rayos y centellas! ¿Qué esperan, entonces, los ingratos indios del Sísig para rendir un condigno tributo a la memoria de esos muníficos benefactores? —Empero, no todo lo que brilla es oro y hace años conocí en poder de fulano Silijala, dueño en Shusho de un manzano por el que se habría dado tres zapatetas la consorte de nuestro padre Adán, un comprobante del oro aportado por su bisabuelo para la supuesta compra de tierras de comunidad, copia del cual reposa en cierto expediente de la Notaría que fue de D. Agustín Dávila Vega. Estoy informando que se conservan otros comprobantes de similares aportes de oro en polvo, así como de joyas que alimentaron el *caudal propio* de los susodichos Rey y Rayo.

La ley 1, tít. 24, L. IV de la *Recopilación de Indias* reza: “Prohibimos y defendemos a todos universalmente. (...) que puedan vender, tomar, prestar, empeñar ni en otra forma CONTRATAR EN ORO en polvo, ni texuelos. (...) **pena de perdimiento**, aplicado por tercias partes, las dos a nuestra Cámara y Fisco, y la otra al denunciador”. Por consiguiente, dichas cincuenta libras de metal precioso habrían sido confiscadas en el acto, si con ellas se hubiese pretendido pagar el precio de las tierras.

Por otra parte, ni el rey ni la Real Audiencia intervenían de manera alguna en la composición y venta de bienes realengos, tarea asig-

nada “a los Jueces y Ministros en quienes se subdelegue la jurisdicción”, a los cuales el rey tenía impartida la instrucción siguiente: “Procederán con suavidad, templanza y moderación, con procesos verbales y no judiciales, en las (tierras) que poseyeren los indios, y en las demás que hubieren menester, en particular para sus labores, labranzas y crianza de ganados; pues, POR LO TOCANTE A LAS DE COMUNIDAD, NO SE HA DE HACER NOVEDAD, MANTENIENDOLOS EN LA POSESIÓN DE ELLAS, reintegrándoles las que se les hubiere usurpado, concediéndoles mayor extensión en ellas, según las exigencias de la población...”. Hasta el más tupido puede inferir de lo transcrito que los indios no tenían que pagar, ni un calé partido por la mitad, por las tierras comunales ni por la mayor extensión en ellas.

En el título fechado en 1743, se consigna que la comunidad de indios del Sísig se compuso, en 1708, con el Lcdo. Sierra y Osorio. Si tal cosa hubiese ocurrido realmente, he aquí lo que debió observarse en 1743: “Que constando por los títulos o instrumentos que presentaren, o por cualquier otro medio legal estar en posesión de tales realengos, en virtud de venta o composición hecha por los subdelegados. (...) LES DEJEN EN LA LIBRE Y QUIETA POSESIÓN DE ELLAS, **sin causarles la menor molestia ni llevarles derechos algunos** por estas diligencias, en conformidad con la ley diez y ocho, título cuatro de la Recopilación de Indias. (...) en inteligencia de que si no tuviesen CULTIVADOS O LABRADOS los tales realengos, se les debe señalar el término de tres meses que prescribe la ley once del citado título y libro. (...) con apercibimiento que, de lo contrario, se haga merced a los que denunciaren, con la misma OBLIGACIÓN DE CULTIVARLOS”.

Si la comunidad ya se compuso con el Lcdo. Sierra y Osorio en 1708, no se comprende como, en 1743, compre sus propios bienes, pagando por ellos el exorbitante precio de cincuenta libras de oro fino. Por cierto, jamás ingresó ese oro en las arcas del real Fisco. ¿A santo de qué botaron los intonsos indios cincuenta libras de áureo metal, esto es, a la cotización actual, unos DOCE MILLONES de dólares? ¡Que tremendo despilfarro de caudales! Lo cierto es que el vivo vive del tonto y el tonto del sudor de sus lomos.

Obra en esta deffensa de la Parciali-
dad de Duma, q' Vicae en el Ramo ge-
nito D^o N^o N^o Duma, q' Cobro de de
El año de setecientos setenta y tres, hasta el
cero de setenta y siete de setenta y siete.

Jambes.
Que amagado fuesen p^o amos genito,
Duma ram
Guernimo Moxcho, V^o p^o — 1^o
Gabriel quilarvaqui, diez ad — 1^o2
Juan Moxcho, diez ad — 1^o2
Manuela Caspi, diez ad — 1^o2
Gabriel Moxa, diez ad — 1^o2
Mathias del Caspi, Cugo diez ad — 1^o2
Hamanagilao, Saguy, diez ad — 1^o2
Antonio Vanchas, elmo diez ad — 1^o2
Juan Caspi, diez ad — 1^o2
Juan Caspi, diez ad — 1^o2
Mathias Moxa, diez ad — 1^o2
Antonio chugui maza, diez ad — 1^o2
Manuel Daga, diez ad — 1^o2
Juan Jimbo, diez ad — 1^o2
Juan Moxa, Beynte ad — 2^o7
Juan Castana, diez ad — 1^o2
Bisente Sanchez, diez ad — 1^o2

Dyaxios
Clemente tencaua, diez ad — 1^o2
Guernimo Daga, fue en persona.
Thomas churta, fue en persona.
Maxiano Buelo, p^o un mes, Dio Beynte ad.
Cabo Buelo, fue en persona.
Daga Daga, Dio diez ad — 1^o2
Manuel Moxa chugui, Dio diez ad — 1^o2
Manuel Moxa, Dio diez ad — 1^o2
Juan Castana, Dio diez ad — 1^o2
Maxiano Castana, Dio diez ad — 1^o2
Juan Moxa, Dio diez ad — 1^o2

D^o Maxima Buelo, Dio diez ad — 1^o2
Bonifacio Buelo, Dio diez ad — 1^o2

Sanancos fampago Malale

Melchor Churta, pago diez ad — 1^o2
Bonifacio Saguy, pago diez ad — 1^o2
Guernimo Daga, pago diez ad — 1^o2
Martín Baga, pago diez ad — 1^o2
Garcia quilarvaqui, en persona
Maxiano quilarvaqui, en persona
Maxiano Moxa, pago diez ad — 1^o2
Joseph Moxa, pago diez ad — 1^o2
Joseph Castana, pago diez ad — 1^o2
Bernardo Moxa, pago diez ad — 1^o2
Luiso Buelo, pago diez ad — 1^o2
Andrés Buelo, pago diez ad — 1^o2
Bisente Buelo, pago diez ad — 1^o2

Esta página contiene la nómina de indios de la parcialidad de DUMA que pagaron en efectivo a fin de no ser constreñidos al servicio de las mitas; la página de la derecha registra los nombres de los indios de BURIN que, así mismo, pagaron para evadir las mitas. Los de DUMA sumaban 34 y los de BURIN 42 el 9 de mayo de 1777. Los que no pagaron por carecer de numerario, los mayores de 50 y menores de 18 años y todas las mujeres sumarían cuando menos 50 esto es que el Sísig contaba, en suma, 126 indios, y no los 20 que afirman los írritos instrumentos mal llamados títulos por la Comunidad de Indios del Sísig.

Comentar tanta sandez resulta en extremo desagradable, y conste que no me detengo en minucias, que volverían más farragosa esta labor. ¿Para qué, verbi gratia, ni por qué, en un título de venta, se le trae de los cabellos al “*Sumo Pontífice, Vicario de Jesucristo su cabeza invisible (sic) y, como tal, es Primado y Patriarca Universal, jefe de todos los fieles*”? ¿Qué ilación puede existir entre la venta de tierras y ese dogma católico? Lo cierto es que, no obstante el cuantioso botín, los timadores no se tomaron la molestia de procurar los servicios de algún pendolista que tuviese siquiera indicios de cómo instrumentar una escritura pública, o una pisca de sentido común para amañar una provisión.

Al igual que se ha machacado la disposición de que sólo Gualaceo ha de ser cantón villa y que Sígsig no ose nunca jamás por los siglos de los siglos cantonizarse, también se ha repetido hasta el cansancio lo de: “*haciendo entregan toda la inmensa reducción del Pueblo entero, y toda la mayor extenciones de los Citios, los Montes, Pastos, Pajas, Aguas y Abrevaderos, el citio de la reedificación del templo y del pantión de los indios, la sacristía y el coro dan por sus linderos en los puntos nuevos mojones, el círculo en líneas rectas* (así: el círculo en líneas rectas. Y aún hemos de haber porfiados que neguemos a macha y machete la existencia del círculo cuadrado). *Por la cabecera con las Jibariás de Calaláes y de Sangurima. Por el pie*” etc., etc. “*para que hagan sólo los indios oriundos del Pueblo del Sígsig suyos y propios para que cada año unos y otros (?) sirvan sólo las cuatro fiestas juradas de Dios y del Rey a que están obligados, haciendo con las bacanales de los Réyeses, Príncipes Gentiles Hereges con juegos prohibidos de chamizas, cuetes hediondos, toros, globos, música de chirimías, flautas, violines y tamboras, bailes de escaramusas, inocentes, contradanzas y danzantes hebreos ante Dios y la imagen que falsos dioses del vino guarde...*”.

Palabrita que no existe, que no puede existir en el mundo entero un título de venta tan original, tan pintoresco, tan folclórico, tan ridículo y tan nadita notarial, elaborado a un costo de muchos millones de dólares, como éste que los indios hasta publicaron alguna vez en letras de molde.

¿A qué obedeció que se repitiera hasta la náusea la letanía de sitios y linderos? –Una de tres: O el escribiente, a lo largo de su actuación,

se mantuvo en estado pluscuamperfecto de beodez; o los timadores pretendieron meter en la cabezota dura de los indios los beneficios que se les otorgaba; o, finalmente, como el texto de una escritura de venta o de una provisión cabría en apenas tres páginas y se disponía de seis, se estiró la pieza a punta de repeticiones hasta llegar al sello impreso. En los documentos genuinos, donde terminaba el texto allí se fijaba el Sello Real, consistente en un papel cuadrado de más o menos diez centímetros por lado, con el escudo real y el nombre del monarca reinante en relieve; sello seco que se adhería con cera de abeja al documento. Pero como en la famosa pieza de la comunidad de indios del Sígsig el sello se había impreso en la parte baja de la quinta página, se alargó fatigosamente el texto hasta, Dios mediante, llegar a él aunque con la lengua afuera.

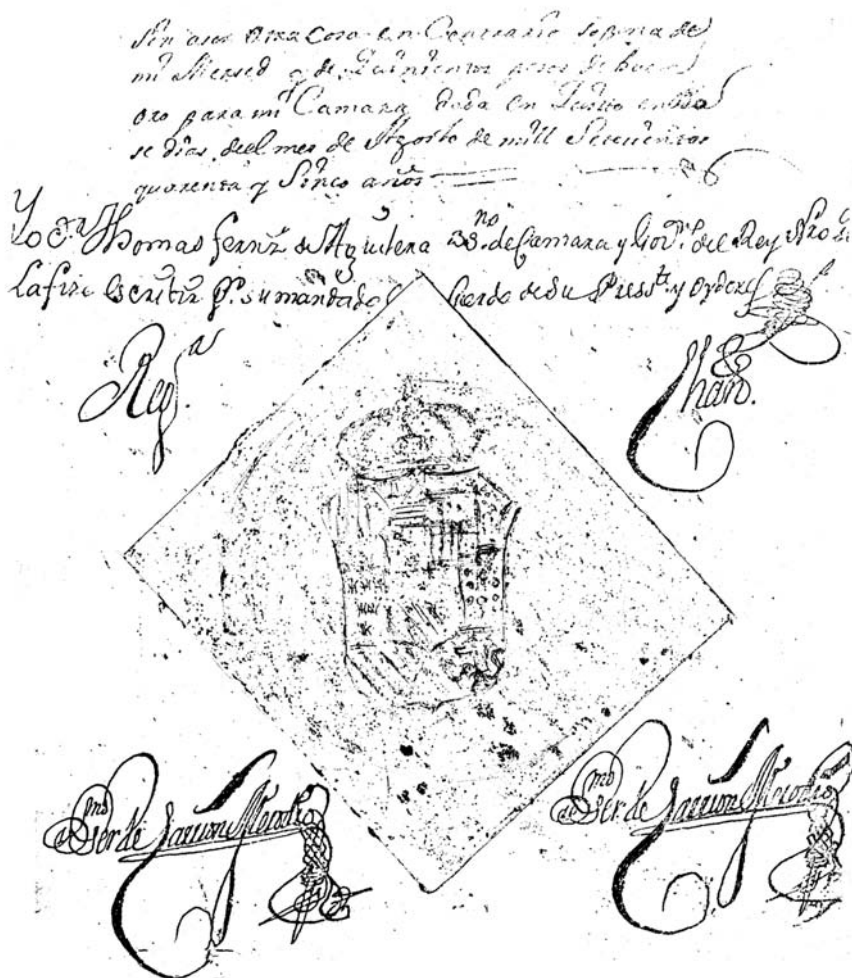
“*Las cuatro fiestas juradas*”. Las fiestas religiosas, sin contar las del rey y los domingos, conforme al Breve de paulo III eran: “...las fiestas de la Natividad, Circuncisión, Epifanía, Resurrección, Ascensión, Corpus Cristi y Pentecostés; así como también la Natividad, Anunciación, Purificación y Asunción de la gloriosa Virgen María Madre de Dios, y las fiestas de los Apóstoles S. Pedro y S. Pablo. Por las causas antedichas concedemos indulto (a los indios) para no guardar las demás fiestas”. Los indios del Sígsig, además, desde tiempos inmemoriales celebran con el bullicio y algarabía de rigor, la fiesta del Patrono del pueblo el glorioso mártir señor San Sebastián. Por manera que lo de “las cuatro fiestas juradas” resulta un enigma. Desde que el primer Flores asumió la Presidencia del Ecuador, partidario insigne del *panem et circenses*, que en castellano decimos **pan y toros**, fomentó las corridas de toros, que se cumplían en Navidad, Año Nuevo, 10 de Agosto y en la posesión de un nuevo Presidente. Como estoy convencido de que el título de marras se falsificó un siglo después de la fecha que en él se hace constar, me imagino que serán éstas las cuatro fiestas juradas, a no ser que algún docto en fanfarrias me saque de la ignorancia.

Da fin y término -¡ya era hora!- este imponderable instrumento de la colección de Ripley, haciendo que el rey se presente a suscribirlo como un escribanillo de tres al cuatro: “*Presente el Rey, su Presidente y Oidores de ella* (se quiere decir de la Real Audiencia) *y el Protector General de los Indios, aceptaron* (ACEPTAR viene del latín *acceptare* y sig-

nifica RECIBIR uno lo que le dan u ofrecen; esto es lo contrario de lo que se intenta decir: dieron, confirieron, otorgaron) *el presente título de Venta Pública a favor de los Indios del Pueblo del Sísig, signan firman el Rey su Presidente y Oydores de ella y el Protector General de los Indios en el día de la fecha: Rey* (¡Santo Cristo del garrote! ¿Firmando el Rey un titulillo de venta? El rey no firmaba sino documentos de altísima trascendencia política o administrativa, y lo hacía de este modo: YO EL REY y, desde luego, ninguna otra firma había de asociarse a la de él), *Excelentísimo*————— (Supongo que este seudónimo está aplicado al Presidente, pero él firmaba: Dr. Dn. Fernando Sánchez de Orellana), *Don Pedro Gomes de Andrade*————— (este oidor firmaba Gómez con z, pero como el timador gualaceño de los mismos apellidos grafiaba Gomes con s, ha creído que todo el monte es orégano), *D. Estewan de Olandís y echevarria*————— (No firmaba de este modo, sino: Licdo. D. Estewan de Olandis y Echeverría) *D. Joseph de Quintana y Azeuedo*————— *Dr. Carrión, Protector General de Indios*—————

Luego, donde el Escribano de Cámara debiera haber sentado la razón de conferir la copia por mandato del Presidente y Oidores, se ha puesto en letras gordas: “*Presentes fueron a su otorgamiento; y en fe de ello, signan firman Confieren esta Primera copia en Quito, a Doce de febrero de mill Setecientos Quarenta y Seis años*”. Mas no hay ni la sombra de las firmas y rúbricas de quienes “signan firman Confieren esta Primera Copia”, omisión catastrófica para su validez. Las dos firmas y rúbricas del Dr. Jerónimo de Carrión Merodio, falsificadas con relativa habilidad con pluma de acero y no de ganso, se encuentran al reverso del último folio, sin conexión con el Registro ni el Sello, y menos aún con el texto; pero aunque estas firmas ocuparan el sitio debido, tampoco reemplazarían a las de quienes “*presentes fueron a su otorgamiento*”.

En el supuesto completamente inadmisibles de que el Fiscal Protector General de Naturales hubiese conferido tal copia, cabe preguntarse: ¿Qué valor se le atribuye a una copia otorgada por quien carece de competencia legal para concederla? —Hasta un rústico *quillca* sabe que tal copia es nula. En nuestros días, el Secretario Relator tiene el deber de “Conferir copias y compulsas de procesos y otras piezas, previo decreto del Tribunal, o de la respectiva Sala, en su caso, en el papel del



En los documentos genuinos donde terminaba el texto se fijaba con cera de abeja un sello seco constituido por un papel de más o menos 10 cm en cada lado del cuadrado, con las armas reales en relieve. A su izquierda, arriba, la abreviatura de **Registrada**, a su derecha, así mismo abreviada **Chancilleria**, y al pie de cada una de dichas abreviaturas sendas firmas del Protector Dr. Carrión Merodio. Requisitos de que carece los títulos de la Comunidad.

[illegible]

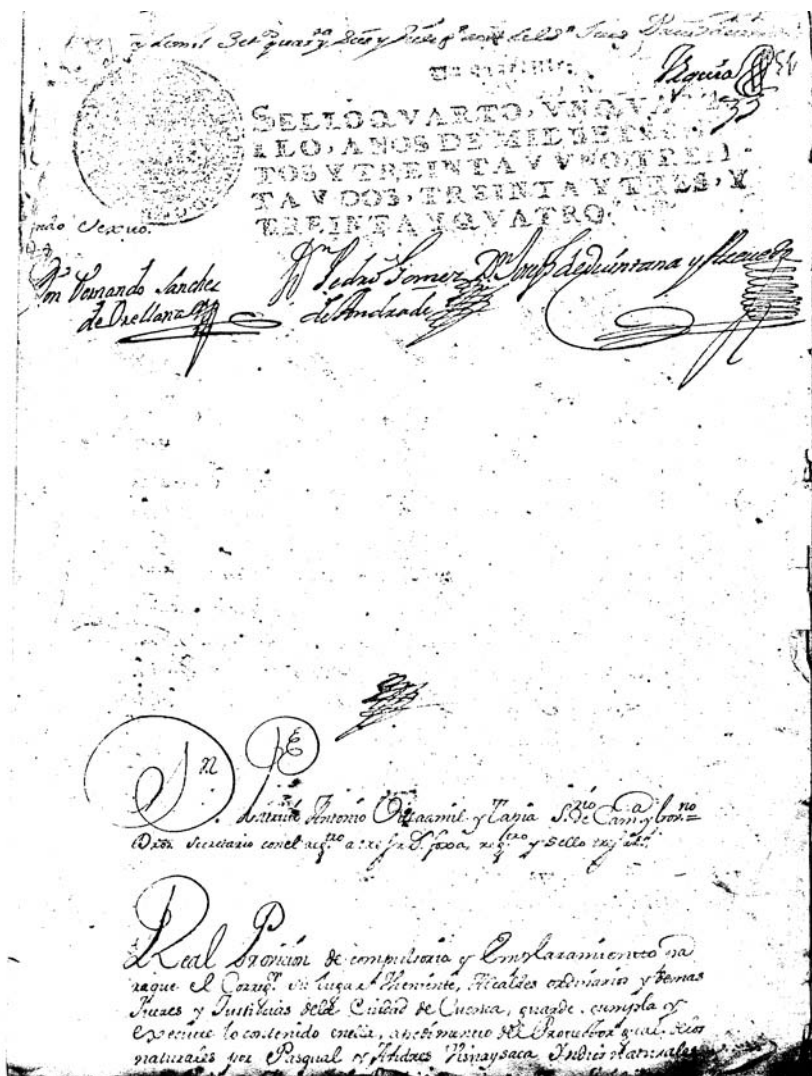
Recand. Juanon à Su. Organimento; y en fi dello, Signan Juanon Confuam
 utalimexa Coppia in Auto, à Doc. de fibaxo de miell Sentintos
 Guaxinta y Cuyi Hnos:

Doc. 1: span on other books. comparison in septuaginta copies. Leipzig, a
3. 18. October 1811. L. B. Ed. "Lips."

Los fabricantes de los “títulos” de la Comunidad al no conseguir el sello seco con las armas de España, para no más de engañar a unos indios ingenuos han impreso en su lugar en mismo clisé de la primera página, tachando con tinta y compás los dos ruedos del elxerjo y destacando un ridículo escudito que en nada se parece a la efígie del escudo real. Las firmas y rúbricas del Dr. Carrión Merodio se han falsificado sonosamente a la vuelta de la página, sin conexión con el Registro y la Chancillería.

sello correspondiente”. En la colonia, tal competencia radicaba en el Escribano de Cámara, según confirmaré más adelante, y el procedimiento era bastante engorroso, como lo voy a describir para poner en evidencia que los instrumentos de la Comunidad de Indios de San Sebastián del Sígsig son totalmente huérfanos de las solemnidades requeridas para su validez: El o los indios interesados en un tanto o copia tenían que dirigirse por escrito al Protector, suplicándole interceder ante el Supremo Tribunal para que éste autorice la concesión de dicho “tanto”. Así mismo por escrito, adjuntando la solicitud de la parte interesada y los instrumentos del caso, el Protector requería la debida atención del Tribunal. En Audiencia de Relaciones se proveía el despacho. Luego el escribano de Cámara sentaba razón de ante quienes se presentó la solicitud, es decir qué oidores estuvieron presentes en la Audiencia, y la fecha. Nada de esto consta en el documento hechizo que los indios de esa Comunidad blanden como espada flamígera. En el folio siguiente venía esto: En lo alto de la página, las firmas y rúbricas del Presidente y de los Oidores; espacio blanco hasta la media página; al pie de dicho espacio, la rúbrica del oidor semanero; inmediatamente debajo de ésta, dos renglones del escribano de Cámara sentado, en tiempo de Sánchez de Orellana: “*Cap. D. Thomás Fernández de Aguilera, escribano de Cámara y Gobierno, Derechos secretario con el Registro, a tres reales foxa. Sello y registro tres reales*”, otro espacio blanco, para luego cerrar la página con cinco líneas, ordenando que el Corregidor de Cuenca y el Alcalde Ordinario D. Francisco de Landín Ponce de León “guarden, cumplan y executen” la Real Provisión (para fuera de las cinco leguas la copia debía conferirse, forzosamente, mediante provisión) a pedimento, en el caso que me ocupa, del Fiscal Protector de Naturales por la Comunidad de Indios de San Sebastián del Sígsig. Nada de esto se encuentra en la supuesta copia del supuesto título de la supuesta venta a los indios suso referidos.

Luego de la página descrita venía la Real Provisión del tenor siguiente: “D. Phelipe por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de Aragón, etc., etc., etc. (La ley 116, tít. 15, L. II disponía: “Es nuestra voluntad que las cartas, provisiones y otras cosas que se proveyeran, se despachen y libren por título nuestro, y con nuestro Sello Real, las cuales sean obedecidas y cumplidas como cartas y provisiones firmadas de nuestro nombre”. Lo cual, obviamente, no significaba que se ha de fal-



Una vez sentado que en Audiencia de Relaciones se acordó conferir copia del documento solicitado por los indios, en el folio siguiente como se ve en la gráfica, constaba: arriba las firmas y rúbricas del Presidente y los Oidores, hacia la mitad la rúbrica del Oidor semanero, y a continuación el Secretario de Cámaras y Gobierno anotaba los derechos del Secretario, del Sello y del Registro. Al pie de la página la orden para que las justicias de Cuenca guarden, cumplan y ejecuten la real provisión que corre en las páginas siguientes. Como los “títulos” de la Comunidad son falsos, no contienen nada de lo descrito.

sificar la firma del rey). A Vos el Corregidor de la Ciudad de Cuenca y Alcalde Ordinario, ante quienes esta mi Carta y Provisión Real fuese presentada y pedido su cumplimiento, a cada uno y cualquier de Vos, Salud y Gracia. Sabed que el Protector de Naturales de mi Audiencia y Chancillería Real que en esta Muy Noble y Muy Leal Ciudad de San Francisco de Quito reside, ante mi Presidente y Oidores de ella, por lo que toca a la defensa y amparo de la Comunidad de Indios de San Sebastián del Sígsig, términos de la dicha ciudad de Cuenca, hizo relación diciendo que los dichos indios tenían y poseían unas tierras llamadas (aquí los nombres) y me pidió y suplicó mandase dar mi Real Provisión. Lo cual visto por mi Presidente y Oidores fue acordado que debía mandar dar esta mi Carta y túvelo por bien; por lo que os mando, para que se sepa cuyas son dichas tierras, se conceda el tanto que los indios del Pueblo del Sígsig solicitan, y no consintáis que de ellas sean despojados sin primero ser oídos y por fuero y derecho vencidos...Y no hagáis otra cosa en contrario por alguna manera so pena de mi Merced y de quinientos pesos de buen oro para mi Cámara”.

Apenas a esta altura tendría lugar la copia del título de venta o de composición, que ocuparía una o dos páginas solamente si no se repitiera una docena de veces el cuento de la cosa que enajena el tradente y la obligación de que el Sígsig, *per saecula saeculorum*, dependa del cantón villa de Gualaceo, ni se emporcara un documento de la seriedad de una escritura pública con andanadas de sapos y culebras.

Sacada y concertada la copia, hubiérase puesto la siguiente razón: “Yo, D. Tomás Fernández de Aguilera, Escribano de Cámara y Gobierno del Rey Nuestro Señor, la fice escribir por su mandado con acuerdo de su Presidente y Oidores”. Finalmente, el Sello Real ya descrito y, a los lados de éste: *Registrada*, a la izquierda, *Chancillería*, a la derecha, y bajo estas expresiones sendas firmas del Dr. Luján, mas no del Dr. Carrión Merodio.

Para develar la patraña no ha sido menester acogerse a las normas de la superhistoria, “aquello que la historia se tragó y que nadie podía pensar que llevaba dentro”, como lo hiciera D. Ramón Gómez de la Serna en su *Da. Juana la Loca*, pues ha bastado contraponer documentos genuinos a las piezas de engañifa. El desenvolvimiento de esta co-

munidad de indios también es historia, aunque sólo interese a un minúsculo conglomerado, y mis rayos X han puesto en claro algo que no se sabía de su paso por el tiempo y están, así mismo, probando que los “**títulos otorgados por el rey**” que tanto envanecen a esos indios, son un vulgar fraude.

Si el título que se halla en la Notaría del Sígsg es lo más logrado de las piezas producidas, a qué quieres boca para explotar a los alucinados indígenas ¿qué de alifafes no afearán los mamotretos protocolizados en Gualaceo? El único mérito de éstos consiste en ser cortos, y al comentarlos pasaré por ellos como sobre ascuas, a fin de no repetir juicios ya expresados. He aquí, antes que nada, una síntesis de estas piezas:

El primer documento simula un nuevo título de venta, fechado ahora el 20 de enero de 1744. Si el año anterior ya compró la Comunidad sus propias tierras por cincuenta libras de oro fino ¿Cómo se entiende que vuelva a comprarlas, pagando esta vez una arroba de oro del inca y una arroba de esmeraldas? En oro, algo así como veinte millones de dólares por tratarse de piezas arqueológicas ¿Cuánto representaría una arroba de esmeraldas, si fragmentillos de la piedra verde cuestan un ojo de la cara? Se habla de “*oro del inca*”. A los hallazgos arqueológicos de piezas precolombinas en nuestro país se venía calificando hasta hace poco de incaicos, y supongo que el referido “oro del inca” provendría de *huaca* cañari, en cuyo caso su valor no tendría precio. Tómese en cuenta que por esa época –aludo a la época en que se han falsificado tales títulos, más o menos por 1832- se realizaron fabulosos hallazgos en Pajtente, territorio de la Comunidad de Indios del Sígsg a orillas del río Shío, algunas de cuyas piezas fueron descritas por primera vez por Heuzey en 1870. Las esmeraldas, igualmente, se sacarían de *huaca*, porque no he sabido de minas de esmeraldas en el Sígsg, bien que los indios aseguran que éstas se localizaban en Buroplaya, entre los dos Fasayñanes.

Con tan ingentes caudales los indios hubieran podido hacer del Sígsg una tacita de oro bruñido, pero es mal probado y reprobadado que Dios da habas a quien no tiene quijadas.

El otro papel trae una solicitud de Carlos Coraga y Francisco Panamá, “*forasteros españoles*” caciques del Sígig. A la vuelta de pocos meses, estos pajarracos han olvidado ser los santafereños Ray y Rayo. Piden que el Presidente LIBERTADOR dicte provisión para contener los abusos de curas y diezmeros. ¡Qué tamaña he-rejía: PRESIDENTE LIBERTADOR en 1744! Libertador Presidente fue Bolívar, aclamado así en 1819, después de su resonante victoria sobre los realistas en Boyacá. Tanto este adefesio como el precedente aparecen suscritos –las firmas y rúbricas se han falsificado con torpeza y todo- por “Carrión, Protector de la Real Audiencia”. Sería, naturalmente, Protector *de los indios* de la Real Audiencia.

El último, más chusco que todos juntos, se titula “*Reglamento Público de los indios caciques y ordinarios*” y, a falta del falsificador de la firma de Carrión que prestó sus servicios en los demás instrumentos, lo ha suscrito con su propio nombre el timador Juan María Gomes de Andrade, el mismo que firma, en 1831, la citada diligencia de la Comunidad en Ramosapana.

Para estas tres piezas no se ha empleado papel con sello alguno, y para el último se ha ocupado un papel viejo, comido en el doblez por el uso, pues seguramente era el forro de uno de aquellos resguardos que los indios, por si las moscas, llevaban cosidos al cuerpo como escapularios. Que este papel tenía un trozo menos en el doblez antes de llenarlo es incuestionable, pues ni en el anverso ni en el reverso falta nada del texto, sin embargo de que en esa fracción hueca cupieran cómodamente dos o tres renglones. Me imagino que los indios de la comunidad han de haber abierto una bocota de a cuarta ante documento como éste, al parecer tan de veras antiguo.

Venta por decreto. Grosería semejante sólo he constatado en documentos actuados por el “Pacificador” González que, habiendo confiscado en Cuenca los bienes de los patriotas, para convertirlos en numerario los adjudicó, *manu militari*, a otros adictos al “cáncer” de la libertad. Que un legista a carta cabal como el Dr. Carrión Merodio certifique que “*habiendo traído a la vista el libro de Determinadas que gobierna a este Juzgado Superior de su Magestad en el año de Setecientos quarenta y cuatro, consta el DECRETO de venta del tenor siguiente*” lo

niego a pie firme, así porque toda venta inmobiliaria se hace por instrumento público, lo que exige intervención de notario, porque no entra en la jurisdicción y competencia del Fiscal Protector General de Naturales conferir copias, asunto privativo del Escribano de Cámara de acuerdo con la ley 89, tít. 15, L. II, que disponía que las Audiencias y Justicias “hagan dar a las partes testimonios que se les pidiere”. (...) “Y los ESCRIBANOS los darán signados, y en pública forma, para que las partes se puedan presentar ante Nos, o donde les convenga”. Copias concedidas por autoridad incompetente se invalidan *ipso facto*. Hacerle aparecer al probo Dr. Carrión otorgando indebidamente estos certificados o copias, es una cuenta más que se suma al rosario de barbaridades ya anotadas y de otras que, por fatiga, dejo en el tintero.

Bastaría este vistazo general a los instrumentos protocolizados en Gualaceo para tacharlos de lo que son: basura. Ello no obstante, como los indios de la comunidad creen que sus títulos valen lo que les costó a sus antepasados, voy a dedicarles un escueto análisis. El 20 de enero –fiesta de San Sebastián, Patrono del Sísig- de 1744 “*ante los señores Presidente y Oydores de ella que abajo suscribirán, Comparecieron presente los Caciques D. Carlos Coraga D. Francisco Panamá hijos de caballeros, Gonzalo Rol santafereño Rayo Caballeros ingleses y de las Doñas del Sísig por medio de su Protector General...*”. Caciques hijos de caballeros, santafereños, ingleses, resulta un intrínquis que pasa de castaño a oscuro. Antes de la revolución independista, los ingleses no pudieron haber ingresado al país ni haber convivido con las “doñas” del Sísig, pues la xenofobia característica del español no lo hubiera permitido, aunque los hijos de Albión hubiesen portado pasaportes refrendados por la Santísima Trinidad; pues suman decenas las ordenanzas que se expidieron prohibiendo terminantemente el ingreso y asentamiento de extranjeros en las colonias ultramarinas. Los ingleses entraron en el país con Sucre. Desde 1822 estuvimos a partir de un confite con Inglaterra y con los inglesitos que, con miras a ejercer predominio comercial en las flamantes repúblicas americanas, aportaban gente y armas a nuestra causa por la emancipación de España: demos la soguilla para sacar la vaquilla. Por otro lado, la ley 21, tít. 3, L. VI mandaba “que en pueblos indios no vivan Españoles, Negros, Mestizos y Mulatos”, y la ley 2, Tít. 4, L. VII, que “los españoles, mestizos, mulatos y zambaigos vagabundos que viven entre los indios sean echados de los pueblos”.

Dichos caciques gringos reciben el título de “*todo el pueblo de tierras y con todo los comederos y bebederos a los contornos del Pueblo del Sígsig, y los MINERALES DE ORO DE SANTA BARBARA DE AYLLON Y DE OTROS PUNTOS MÁS HEREDEN LOS CACIQUES* (se refiere a los caciques gringos, no a los indios rústicos) *como oriundos del pueblo habida y adquirida por sus madres indias lexítimas y por esto también dejan libre para que en cualquier tiempo HEREDEN LA REAL FAMILIA DE LOS CACIQUES QUE SON LOS INGLESES LOS ESPAÑOLES*” ¡Real familia! ¡Hijitos estos caciques del rey Lear, de Juana la Loca, de Felipe el Hermoso? ¡Válgame Dios, qué sarta de estupideces y qué escarnio de la prosodia, la sintaxis, la lógica y todo! Ni el barrendero del Real Acuerdo habría sido competente para redactar una pieza de bastardía tan extraordinaria.

Las minas fueron en la colonia, y lo son en nuestros días, propiedad del Estado. La vigente LEY DE MINERÍA, en su artículo 5 dice: “**Dominio del Estado sobre minas y yacimientos.** Pertenecen al dominio inalienable e imprescriptible del Estado todas las sustancias minerales existentes en el territorio nacional, cualesquiera sean su origen, forma y estado físico, hállese en el interior o en la superficie de la tierra, en los fondos o en las aguas marinas”. En 1559, la princesa Juana expidió a nombre de Felipe II una ley, estableciendo que las minas eran de propiedad de la Corona, esto es del Estado. Felipe II dictó las “Ordenanzas del Nuevo Cuaderno”. En 1744, la ley 14, tit. 4, L. VIII disponía: “*Tengan nuestros Oficiales Libro separado, donde inventarién y asienten todas las minas y vetas de oro, plata, azogue, plomo, cobre, estaño y los demás minerales, QUE NOS PERTENECEN Y HEMOS DE HABER conforme a las Ordenanzas*” (...) “*Las minas son propias de mi Real Corona, así por su naturaleza y origen, como por su reunión dispuesta en la ley 4, tit. 13, L. VI de la nueva Recopilación*”. A los indios de la comunidad les han hecho creer que, en virtud de sus títulos, son dueños y señores de las minas del lugar, a tal punto que el Cabildo pequeño vendía –no sé si lo siga haciendo– “cajones” o metros cúbicos de tales minas, en flagrante violación de las leyes y en perjuicio del Fisco. Por cierto, los falsificadores de tan maravillosos títulos se cuidaron muy bien de no vender las minas a la Comunidad; lo que ellos afirmaron es que *los minerales de oro HEREDA la familia real de los caciques, QUE SON LOS INGLESES, LOS ESPAÑOLES*. ¿Se trata de una mofa

escalofriante de la ignorancia de los indios, o de una ignorancia galopante de los estafadores?

“Para seguridad de la Comunidad haciendo entregamos este título de Benta por dichas tierras de Comunidad”. Cuanta honradez en afirmar que venden a la comunidad las tierras de la comunidad; pero esto es tortas y pan pintado, al lado de la cínica confesión que corre a renglón seguido: “Los caciques confiesan tener PERSIBIDOS una arroba de oro fino del inca y así mismo una arroba de esmeraldas”. Si el oro que los supuestos caciques gringos percibieron tan sin esfuerzo fue oro de *huaca*, cañari y no incaico, la mitad le hubiese tocado legalmente al rey, pues la ley 2, tít. 12 L. VIII preceptuaba: “Que los tesoros hallados en sepulturas, oques, templos, adoratorios o heredamientos de los indios, sea la mitad para el rey, habiendo sacado los derechos y quintos”. Dicho oro era, generalmente, encobrado, que la ley 1, tít. 22, L. IV dice llamarse *guanín* y que nosotros conocemos aquí por *tumbaga*; razón por la cual, antes de ingresar en las Cajas Reales debía ser quilatado, fundido y quintado.

Otra vez la muletilla: “...y por esto dejan enteramente libre para que en cualquier tiempo hereden la Real familia de los caciques que son los ingleses los españoles y hallándose presentes los Caciques aceptan este título de benta”. Este fabuloso título sí que tiene entripado: Los admirables caciques gringos ellos mismo “haciendo entregan” el título de venta, ellos mismo “perciben” o cobran una arroba de oro y otra de esmeraldas, y ellos mismo *aceptan* el título de venta. ¿Y qué de bueno para los indios de la comunidad, que sin ton ni son pagaron tan enorme suma de oro y esmeraldas? –Nada de nada; a no ser, quizás, un merecido puntapié por *muspas* en salva sea la parte.

Las penas contra quienes “salieren embarazando” la posesión y herencia de tales caciques extranjeros son más severas que un catafalco: “de que fuese seguido el juicio criminal y sus penas den (sic por “so pena de”) Diez Mil pesos de oro fino para Nuestra real Majestad y un año de cárcel y cien azotes y que sean herrados y vendidos por esclavos al rey Nuestro Señor por título de venta”. Todo acumulado, como si cada una de esas penas no valiese por un almadanazo. Cuando los hispanos llegaron a América, el tráfico de esclavos era en Europa negocio legítimo,

y como los conquistadores trataron de hacer esclavos a los indios, la Corona declaró terminantemente, hacia 1500, que éstos eran “**vasallos libres y no sujetos a servidumbre**”. ¿A quién se le ocurre que vasallos del rey puedan ser vendidos al rey como esclavos, y no así como así, sino por título de venta? Si la multa de quinientos pesos era onerosa en extremo aun para entidades e individuos bien acaudalados ¿qué decir de una de diez mil, que significaba un fortunón, por la simpleza de embarazar la posesión y herencia de caciques como los del cuento? Los azotes estaban severamente prohibidos y lo de herrar a los infractores y venderlos como esclavos, tal que piezas de ébano, es una blasfemia del porte de una catedral. “Una de las cosas más principales en que nuestras Audiencias de las Indias han de servirnos –disponía la ley 83, tít. 15, L. II- es tener muy especial cuidado del buen tratamiento de los indios”. La ley 30, tít. 18, L. II rezaba: “Deseamos que los indios sean en todo relevados, y bien tratados, y no reciban molestia alguna, daño o perjuicio en sus personas y hacienda”. Y cien otras disposiciones para que los vasallos del rey, y, especialmente los indios, sean tratados con benignidad y amor. Claro que del dicho al hecho hay gran trecho y, según las NOTICIAS SECRETAS de los geodésicos Jorge Juan y Antonio de Ulloa: “No parece sino que los Reyes de España y su Consejo de Indias promulgaban leyes benignas a favor de los pobres indios con el sólo objeto de que aparecieran en el Código, puesto que ordenaban privadamente a los Virreyes, que pusiesen en ejecución medidas contrarias al espíritu y a la letra de aquellas mismas leyes. La *mita* por ejemplo, aquella conscripción exterminadora de los indios, era contraria al espíritu de las Leyes de Indias, y sin embargo fue establecida casi al principio de la conquista...”.

Por infracciones verdaderamente graves, como la de ponerle entredicho al Gobernador por promulgar reales provisiones que desagradaban al Cabildo, la multa apenas llegaba a cincuenta pesos, como se ve en el siguiente documento que lo copio de la “Tabla de los Géneros de Penas de Cámara y Gastos de Justicia (1708-1710)” del Archivo Nacional de Historia: “*MULTA DE LOS REGIDORES DE CUENCA: En Quito en veinte y siete de febrero de mil setecientos y nueve años, nos hacemos cargo de Doscientos y Noventa y quatro patacones que enteró el Capitán Bernardino de Anagoitia en nombre del Capitán Lorenzo Beltrán theniente General de la Ciudad de Cuenca, quien los cobró de los Regidores*

del cabildo de ella por las multas que se les impusieron a cinquenta patacones cada uno en virtud de la real provisión despachada por esta Real Audiencia en razón de la competencia que formó un alcalde ordinario fomentado del dicho Cabildo y su Procurador General con el Corregidor D. Luis Guillén repugnando el auto que en conformidad de dos Reales Provisiones publicó para que los caciques de los pueblos de Taday y SIGSE no fuesen obligados a enterar a la mita más de la quinta parte de los indios presentes...”.

Las sanciones contra quienes maltrataban a los indefensos indios eran, esas sí, como para echar a correr; y, de habérselas observado puntualmente, el cuello de muchos cristianos hubiera intimado relaciones con la cuerda: Pasaporte al país de los ñatos.

Verdad es que el rey moraba muy lejos y que, allende los mares, sus sabias órdenes se violaban impunemente; pero de allí a canonizar las transgresiones en documentos públicos es torpeza insoslayable; y no se concibe que documentos contrarios a la ley, a la moral y a la sensatez aparezcan suscritos por el Dr. Carrión, Protector General de los Naturales –que no fue tal Protector en 1744, conforme expuse anteriormente- quien solía sacar la cara por los indios en forma noble, altiva y hasta vehemente. El simple cotejo de las firmas y rúbricas del Dr. Carrión puestas en este documento y en el que sigue, con firmas y rúbricas del Dr. Carrión, bastaría para que aquellas fueren graduadas de espurias por cualquier persona que tenga ojos para ver; pero se haría bien, a fin de confirmar este aserto, en someterlas al juicio autorizado de un perito grafólogo.

El segundo de los documentos protocolizados en Gualaceo contiene tres supuestas copias: la primera produce una queja de los *caciques españoles* Coraga y Panamá, quienes piden se dicte real provisión para contener el desmán de curas y diezmeros en obligar a los indios, con pretexto de tierras de comunidad, a servir de postas, pongos, hortelanos, meseros y vaqueros. “*En Audiencia de Relaciones ante el Presidente LIBERTADOR se presentó esta petición*”. Tanto tenía de LIBERTADOR el Presidente Dr. Sánchez de Orellana como yo de astronauta. Sin previa averiguación ni formalidad legal alguna, el “LIBERTADOR” ordena que inmediatamente los curas y diezmeros liberten de tales servi-

cios a los indios, so pena de mil pesos de oro del inca y dos mil de esmeraldas. *Auri sacra fames* que dijera Virgilio: Termina así esta burrumbada: “*Por mandado de su Majestad – Excelentísimo*———
— Ya puntualicé los requisitos de una provisión, de suerte que huelga cualquier comentario acerca de esta “*provisión*” del LIBERTADOR.

Con punto aparte se inserta la segunda copia: “*Señor Presidente de la Majestad de la Provincia de Quito: Habiendo Representado en este Juzgado Superior de su Majestad D. Carlos Coraga D. Francisco Panamá, deel Pueblo deel Sígsig en beneficio de los Maestro de Capilla...*”. No se declara qué se pide a favor de éstos, ni quien dicta la siguiente orden: “*El buen orden de la ciudad y de los pueblos de los campos (¿Por qué no harán las ciudades en el campo? Como preguntaba el otro) reservo un maestro de capilla y un sacristán que sean enteramente libres de las contribuciones establecidas y a los músicos también garantizo en particular en Hesiodus (sic) para la celebración de las funciones*”. Si esta chuscada se fundase en derecho por poco familiarizado que estuviese el autor con la **Recopilación de Indias** habría asimilado los maestros de capilla a los cantores y sacristanes y salido airoso del paso. En efecto, las leyes 6 y 7, tít. 1, L. VI mandaban: “En todos los pueblos que pasaren de cien indios haya dos o tres cantores, y en cada reducción un sacristán, que tenga cuidado de guardar los ornamentos y barrer la iglesia, todos los cuales sean libres de tasas y servicios personales. (...) y los curas no los podrán ocupar fuera de su oficio, si no fuese pagándoles su trabajo y ocupación”.

La orden susodicha no señala el salario que ha de pagarse a los maestros de capilla; pues, de buena o mala fe, sólo consta en ella la abreviatura de reales. Y si tal pago no se satisficere, el gobernador y los demás caciques del pueblo “*harán que se obedezcan la Presente Orden*”. Autoridades proporcionadas a la calidad de semejante orden, que dizque firma un tal *Excelentísimo*.

En el tercer acto de esta sin par comedia aflora el cansancio mental que ha hecho presa del autor, quien hasta aquí no daba pie con bola y que luego se va de bruces: El “*Presidente de su Majestad*” regula, por su propia cuenta y riesgo, cómo ha de organizarse el cabildo de indios del Sígsig: “*...y menos nombren a los indios Catalanes polvos, criados de*

los curas y diezmeros”. Se trata, por lo visto, de una *yapita* a la orden precedente; pero ni con la mejor voluntad del mundo puede creerse que tamaño dislate se hubiese actuado en tribunal alguno de justicia, ni por persona medianamente instruida. En el habla vulgar *catalán* alude a bozal; lo de *polvo* ignoro qué acepción particular habrá tenido entonces en Gualaceo, donde evidentemente se han amasado estos despapuchos. Contiene la pieza una singular disposición, que al Elías Belisario Sánchez le hubiera llegado a la pepita del alma: “*No tienen licencia para ser defensores ni pleiteantes*”. También este exabrupto lo firma el anónimo “*Excelentísimo*”. El “*Es copia*” etc. lleva la firma falsificada del Dr. Carrión ¡Pobre Dr. Carrión, cuyo ilustre nombre ha sido tan irrespetuosamente arrastrado a semejantes albañales!

Los pelafustanes que abortaron tanta majadería, soltaron una pieza más, tan abominable como las anteriores, conteniendo dos documentos: una ordenanza sobre fiestas, repositorio de pecados contra la gramática y la sindéresis, y un *Reglamento Público*, que no regla nada sino que enlista a los indios del Sísig en cinco grupos o clases. El primero está dirigido al “*Señor Presidente de su Magestad de la Provincia de Quito*” y lo suscribe ¡qué barbaridad! El anónimo “*Excelentísimo*”, esto es el mismo Presidente. El texto reza: “*Pro Mandado de su Magestad que ordenó a los indios deel Sísig y estos indios están obligados a Cervir las fiestas de Dios Nuestro Señor Jesucristo, y deel Rey Nuestro Señor, un año solo por devoción si pasaran con Pretestos de Devociones de dos o tres años: son abusos que se cometen un hurto, de Dios y deel rey; por estos abusos mando al Governador Salvador Sánchez, y al Regidor y Alcalde Manuel Paltán que administren justicia breve y sumariamente*”. Esta es la última pieza literario-jurídica de tan admirable colección, en la cual sus autores se han mostrado grandes artistas de la palabra y han derrochado los primores de la lengua cervantina; pues la que viene ya no goza de estas excelencias por tratarse solamente de una lista de nombres.

Oportunamente expuse que los indios, en la colonia, se agrupaban en dos clases: oriundos y forasteros. También expuse que los mestizos no podían ser caciques, puesto que el cacicazgo se equiparaba al mayorazgo de España. Sin embargo, el abstruso “*Reglamento Público*” endilgado a la Comunidad de Indios del Sísig les divide a éstos en cin-

co clases: En la primera, como no podía ser de otro modo, figuran los dos falsos caciques santafereños, españoles, ingleses, gualaceños o lo que hayan sido; en la segunda, siete indios del lugar, al parecer miembros del cabildo pequeño, a quienes se designa “*quintos Cesques*” (sic); en la tercera, cuatro sujetos apodados “*caciques corona reales*”, que si eran de la Real Corona, esto es forasteros, mal podían ser caciques; en la cuarta, catorce “*mitayos polvos (...) indios cocineros plebes*”, seguramente puruhayes si nos atenemos a sus apellidos, por lo tanto forasteros incapaces de integrar la Comunidad; y en la quinta, un tal hijo del “*Sorro Negro que se lla* (sic) *indio faco* (sic) *Mulato*”, y otro “*también hijo deel infelis Jíbaro Bruto hereje*” y “*estas dos familias de indios no Cirven para combersación, ni salutación, son maldecidos de Dios y del Rey hasta el día final*”. ...A la legua se echa de ver que estas dos familias, maldecidas sin redención posible, no aportaron ni una chispa de oro ni de esmeraldas al “*caudal propio*” de los desaforados estafadores.

Ya tuve ocasión de manifestar mi fundada sospecha respecto a quienes pudieren haber sido los timadores. Los timados serían el gobernador Salvador Sánchez, el regidor Manuel Paltán y el resto de indios constantes en el *Reglamento Público*, excepto, naturalmente, los supuestos caciques gringos de primera clase, de real familia. Sin embargo, ni por casualidad no existe uno solo de los veinte y nueve nombres de tales indios en padroncillos ni en censos del siglo XVIII a no ser el de Salvador Sánchez Fuera, gobernador de la Comunidad en 1773 y 1774, seguramente homónimo de Salvador Sánchez que figura en el Reglamento; lo que significa que los nombres de la lista corresponden a quienes integraban la Comunidad en el momento de falsificarse la pieza, a mediados del siglo XIX; y, de ser así, ni los bisabuelos de las víctimas de tan fabulosa estafa han de haber visto aún la luz de este pícaro mundo en 1743 y 1744; años en los cuales fue cacique y gobernador del Sísig D. Phelipe Duma, cuyo nombre ignoraron por completo los falsificadores.

IV

CONCLUSIONES PERTINENTES

Mi modesto trabajo ha aportado datos fehacientes para evidenciar que los instrumentos protocolizados por la Comunidad de Indios de San Sebastián del Sígsig son írritos y de ningún valor. Que otros investigadores completen el estudio hasta develar autores cómplices y encubridores del vil atraco infligido a la Comunidad, así como la identidad de esas aves de rapiña que unas veces se apodan de Ray y Rayo, y otras Coraga y Panamá, dos de los estafadores autoerigidos caciques del Sígsig con el propósito de arreglar las cosas a su amaño. Este ilícito ocurría en plena república y no en 1743 y 1744, cuando las comunidades de indios habían sido ya borradas del mapa por el Libertador Bolívar mediante decreto firmado en Trujillo el 7 de abril de 1824, prescribiendo que los bienes raíces de las comunidades sean repartidos conforme a una ordenanza entre todos los indios que no gocen de alguna otra suerte de tierras, quedando dueños de éstas, y que se vendan las restantes. Algunos sociólogos han levantado voces agrias contra tal decreto; pero éste se ejecutó, y yo pienso que buenas razones pasarían en ese tiempo para que se arbitre tal medida. También Juan José Flores dictó un decreto parecido el 16 de enero de 1832 disponiendo, además, que los dineros provenientes de la venta de tierras comunales se destinen a la educación de los indígenas, fundando escuelas en los respectivos pueblos.

Sería interesante verificar la época en que vivieron los indios cuyos nombres constan en el predicho “Reglamento Público”, que ha de

ser a mediados del siglo XIX y no del XVIII. Pueden servir de ayuda en esta tarea el censo de población levantado por orden de Bolívar en 1822, que original reposa en el Archivo Nacional de Bogotá, y el censo poblacional y ocupacional del cantón Sígsig, practicado en 1864. Más o menos por 1960 consulté este invalorable censo para completar los datos demográficos que constarían en mi Monografía del Cantón Sígsig; pero cuando, años después, traté de reverlo, se me informó que se hallaba en poder del extesorero municipal. Haría bien el Departamento de Patrimonio Cultural o el Municipio del cantón Sígsig en recuperarlo y protegerlo, como merece un tesoro de esta índole; pues, aparte de coincidir con el año de erección cantonal, se trata de uno de los censos más bien logrados, que aún en la actualidad podría servir de modelo.

Yo no me propuse tales investigaciones. Únicamente quise demostrar la clase de manuscritos que los indios de la Comunidad del Sígsig protocolizaron, imaginándolos útiles para amparar su prurito de adueñarse del inmenso territorio de las parroquias Sígsig, Güel, Cuchil y Jima en el cantón Sígsig, y de otra enorme extensión en el cantón Gualaquiza. Esos manuscritos deslayados y sin sentido no resisten el más somero análisis jurídico. “Una declaración desprovista de sentido no crea documento alguno”, sentencia Mezger. A juicio de Soler “no debe considerarse documento una copia no firmada”. Jiménez Arenjo afirma que documentos públicos “son los autorizados por un Notario o empleado público competente con las solemnidades requeridas por la ley”. “Documento público –según Carrara- quiere decir documento revestido de fe pública; documento que hace fe frente a todos los ciudadanos y que eventualmente puede ser invocado como título en interés de cualquier individuo”. Es decir que, conforme al criterio de los más célebres tratadistas de Derecho, los manuscritos protocolizados por la Comunidad de indios del Sígsig no son documentos, ni sirven de títulos, ni valen para maldita la cosa porque no hacen fe; son solamente basura.

En sustancia ¿Qué ha revelado el estudio sobre la historia de la Comunidad de Indígenas de San Sebastián del Sígsig y sobre los manuscritos que ellos suponen ilusamente títulos de propiedad otorgados por el rey de España?

- a) Que desde 1540. o quizás desde la gentilidad, los indios del Síg-sig estaban en posesión y tenencia de las tierras que viles timadores simularon venderles, siglos después, por una exorbitante suma de oro y de esmeraldas;
- b) Que durante la colonia las comunidades indígenas no ejercían dominio sobre las tierras que se les asignó, sino únicamente su **administración y usufructo**; y esto a cambio de que forzosamente sirvan las mitas. El dominio de tierras comunales residía en el Fisco;
- c) Que esa comunidad nunca compró las tierras a ella asignadas; pues, de lo contrario, los comuneros habrían quedado libres de tasas y servicios. Los documentos que he transcrito evidencian, sin embargo, que en años posteriores a 1743 y 1744 los indios de la comunidad continuaban siendo mitayos; y la vez que se resistieron a cumplir las mitas, en 1768, se les amenazó con privarles de las tierras, asignadas precisamente “bajo la pensión de los viaricos”;
- d) Que en 1822, por decreto de Bolívar, fueron extinguidas las comunidades de indios, debiendo repartirse sus tierras y venderse los sobrantes; y que, en 1832, Flores decretó igual medida;
- e) Que los anacronismos, vicios legales, inobservancia de las solemnidades de rigor, suplantación de firmas, disparates, incongruencias, ridiculeces, mezquindades y absurdos que plagan los supuestos títulos de la comunidad, acarrearán la nulidad absoluta de esas pruebas. Por cierto, toda nulidad es absoluta e insubsanable. Ni la prescripción puede validar un negocio nulo, de acuerdo con la conocida máxima: “*quod ab initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere*”; y
- f) Que lo que los estafadores vendieron a la comunidad por sumas tan fabulosas de oro y de esmeraldas, no fueron tierras ni bienes de ninguna clase, sino solamente unos papeluchos de burla. La utilización de estos falsos documentos para reclamar el territorio que se simula venderles constituiría un intento de estafa penado por las leyes. Les asiste sí, a los burlados comuneros, el derecho imprescriptible de reclamar a los causahabientes de los timadores, en cualquier tiempo, las arrobas de oro y de esmeraldas que les arrebataron con engaño; los millones de dólares que significarían el oro y las esmeraldas timadas.

No extraña que los indios hayan sido engañados, pues lo han sido toda la vida, ni extraña que sigan con la venda en los ojos. Que los abogados de la Comunidad —que posiblemente han de haber hojeado los despapuchos calificados de títulos— echen por la borda su moral y su sapiencia para auspicar las pretensiones de quienes han contratado sus servicios, también es humanamente disculpable. Pero que los integérrimos tribunales de justicia y las celosas autoridades de la administración pública se hagan de la vista gorda ante contrahechuras tan manifiestas y fallen como lo pide la comunidad, es inadmisibile. ¿Irresponsabilidad? ¿Pereza crónica para estudiar las pruebas? ¿Tráfico de influencias? No cabe imaginar que se desconozca lo que norma el Código de Procedimiento Civil en el párrafo relativo a instrumentos públicos o AUTÉNTICOS, que hacen fe y constituyen prueba plena; y sobre la falsedad manifiesta de un instrumento, que lo invalida sin necesidad de prueba, lo cierto es que, desde cuando tales manuscritos se protocolizaron, la comunidad ha obtenido la venia jurisdiccional para perpetrar tropelías y exacciones en perjuicio del fisco, de la curia, de la municipalidad y de particulares.

Un documento es falso, expresa Carrara, por fabricación cuando alguno lo ha creado. Otros tratadistas de derecho Penal opinan que la más característica forma de imitar es confeccionar íntegramente un objeto, acción generalmente denominada falsificación por creación, falsificación en sentido estricto, contrahechura. La adefesiosa falsificación de títulos, cuajada de vicios y desprovista de sentido es, pues, una contrahechura incuestionable. Por cierto, los autores no le atribuyen importancia a la falsificación en sí misma, y poco les falta para calificarla de inocente y agradable pasatiempo. El delito, en efecto, radica en el uso de la falsificación, en la utilidad funcional del documento falsificado con miras a derivar de él algún derecho. De suerte que, en el caso materia del presente estudio, los ingeniosos escamoteadores del oro y de las esmeraldas de los indios del Sísig, que falsificaron con tontera y todo los admirables “títulos” que se ha visto, pueden seguir tranquilitos en las consabidas pailas de don Sata, sin que ningún mortal les friegue la pita. Lo criminoso está en la acción de la Comunidad, puesto que ésta ha venido usando y abusando de esas groseras falsificaciones con miras a exigir derechos. El uso de una falsificación (joya, moneda, documento) es siempre un acto doloso y, por tanto, punible. Y los jueces o

autoridades que aceptan al tráfico jurídico un documento falsificado incurrir en perjurio y en dolo a la vez. ¡Qué quieres, lucero! Obviamente, carecen de valor las resoluciones de la autoridad que se fundan en pruebas apócrifas, irritas, sin fe.

No existía constancia de que los tradentes hubiesen jamás hecho la entrega material de la cosa enajenada a favor de la Comunidad de indios de San Sebastián del Sísig. Pretendiendo subsanar vicio tan atroz, por sentencia del 13 de enero de 1899 –a los ciento cincuenta y seis años de la fecha consignada en los títulos de embeleco- se dispone la entrega material; sentencia que la ejecutan, días más tarde, el alguacil mayor del cantón y el escribano público. Estos funcionarios dan posesión a la Comunidad de los sitios “*todos los lugares que abraza los títulos que conservan los comunarios*”. La doctrina jurídica, lo repito por enésima vez, es categórica en declarar la nulidad de tales actuaciones.

De otro lado ¿cómo observaron los indios de la comunidad sig-seña los términos de esa extemporánea entrega material? He aquí un botón de muestra: Se les entrega la loma de San Marcos precisando que ésta limita por el norte con terrenos y casa de la municipalidad. ¿Por qué diablos, entonces, la comunidad se ha adueñado de tales terrenos y casa del pueblo? A propósito, vale la pena recordar la época en que se estableció esa casa. En informe del 22 de abril de 1885 al Congreso Constitucional, Don Antonio Vega exponía: “La construcción de la casa municipal está ya muy adelantada: la casa contendrá locales cómodos para los despachos Municipal, de policía y Judicial. El cantón está llamado a una gran significación en nuestra Provincia y no dudo que sabrá conservar y conservará la vida propia que le ha dado la gloriosa Restauración, nacida en parte de su seno...” Cuando yo era niño, cursé el primer y segundo grado en la Escuela Hno. Miguel que funcionaba en esa casa, cuyo Director fue Dn. Nicolás Escandón. Pero ya entonces la casa comenzó a destruirse y al fin se asoló, pero el sitio seguía siendo municipal y no hay constancia de que la Comunidad lo hubiese comprado.

Es hora de poner punto final a este tema, que lo he tratado desde el punto de vista serio, a la luz de la historia y del derecho. Materia hay de sobra para una pieza jocosa; pues si la realidad no fuera trágica,

los fabulosos “títulos otorgados por el rey” harían reír a carcajada batiendo al más severo dómine. Al abordar el estudio de esas pruebas me prometí no avasallar derechos, sino únicamente demostrar cuan errados andan dichos indígenas en venerar esos desmirriados mamotretos. He satisfecho la tarea en medida de mis aptitudes, y confío que este trabajo alentará a investigadores mejor dotados a alambicar conceptos en afirmación de la verdad.

Se dirá que hablar de tales indios de asuntos intrincados es perder el tiempo, pero me alienta el criterio de Unamuno que, al comentar el discurso del Quijote a los cabreros, dice: “Robusta fe en el espíritu hace falta para hablar así a los de torpes entendederas, seguros de que sin entendernos nos entienden y de que la semilla va a nutrirse en las cárcavas de sus espíritus sin ellos percatarse de tal cosa”.

Y *tableau!* Como dicen los franceses.

APÉNDICE

**1756-1757.- PADRONES DE
INDIOS QUINTOS ORIUNDOS.
SÍGSIG**

Padrones de indios quintos 1756-1757

El Marqués de Selva Alegre D. Juan Pío Montúfar, Presidente de la Real Audiencia de Quito, en cumplimiento de una Real Orden del 1ro. de mayo de 1758, dispuso el 2 de mayo de 1750 que el Corregidor de Cuenca D. Juan Miguel Nicolás y Pérez Vargas informara detalladamente acerca de las autoridades civiles, municipales y eclesiásticas de su jurisdicción, indicando las rentas que percibían y el origen de las mismas, así como el rendimiento del tributo de los indígenas.

En el Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores se conserva original, en 278 páginas, el informe sobre dicha materia elaborado conjuntamente por el Corregidor de Cuenca, el Contador D. Juan Bautista Benítez y el Tesorero D. Juan Bautista Zabala. De ese detallado informe proceden para este Apéndice los Padrones de Indios Quintos Oriundos, correspondientes a los pueblos que actualmente integran el cantón Sigsig.

Los referidos padrones convienen a Navidad de 1756 y San Juan de 1757. De imaginar sería que en ellos constaron varios nombres de los indígenas supuestamente registrados, apenas doce años antes, en el famoso Reglamento Público protocolizado con otros papeles de la misma calaña en una Notaría de Gualaceo; pero solamente se halla el

de D. Lorenzo Duma, seguramente un homónimo porque está claro que no fue en 1744, sino aproximadamente cien años después que se fabricaron los adefesios que los indígenas del Sígsig califican de **Títulos otorgados por el rey**.

Cuando en el párrafo anterior me referí a ese Reglamento, que no regla nada, sino que enlista a los indios en cinco clases, omití exponer los nombres de los individuos de cada clase, limitándome a señalar el número de los mismos. Aunque Sígsig era el pueblo, los indios seguían afiliados a sus parcialidades de Duma y Burín, de modo que no es correcto que a “indios del Sígsig” se los distribuyera en clases. Ahora hago constar tales nombres para que se los pueda cotejar con los que aparecen, con indicación de la parcialidad, lugar de trabajo y edad, en los padrones de 1756-1757:

- ✦ *Primera clase:* D. Carlos Coraga y D. Francisco Panamá, caciques españoles de la Real Corona de el Rey.
- ✦ *Segunda clase:* Miguel Laso, Manuel Magse, Manuel Paltán, Salvador Sánchez, Lorenzo Duma, José Sigüencia y Matías Coronel, Caciques Quintos Cesques, indios naturales.
- ✦ *Tercera clase:* Fulgencio Morocho, Marcial Morocho, Valentín Placencia, Gaspar Alias Curuguallo y Sánchez, Caciques Corona Reales indios puros.
- ✦ *Cuarta clase:* Mitayos Polvos: Gabriel Santiago Mocón (puru-hay), Pedro Ortega (puru-hay), Eugenio Saitama, Masato Mocón, Manuel Zhuzhingo Zhimnaicela, Manuel Sorro Pulla, Mariano Pulla, Mariano Sagbaicela, Antonio Zamora, Ambrosio Cuesco de Cuzco, Pedro Concha Saquinaula, José Loja, Juan Silijala, Nicolás Saiasaria y Simón Marca, indios cocineros plebes.
- ✦ *Además:* Blas Llanos, hijo del Sorro Negro y Marcos Buele, hijo del jíbaro bruto hereje de Sangurima. “Estas dos familias de indios no cirven para conversación, ni salutación, ni para un testigo porque tienen la sangre de los impíos. Son maldecidos de Dios y de el Rey, y hasta el día final...”.

Padrones de indios quintos oriundos

XIMA

En el Pueblo de Xima en onze días del mes de Agosto de mill se-
tecientos sinquenta y siete años, su merced el Sr. Corregidor hizo carta
cuenta de dos tercios –Navidad de 756 y San Juan de 757- con D. Ma-
nuel Tenesaca casique de los indios quintos de dicho Pueblo de Xima,
en esta manera———

El dicho D. Manuel Tenesaca

Agustín Malla	con Serrano	de 45 muerto
Joseph Malla	allí	de 49 reservado
Pheplipe Pucha	en Bolo de Pacheco	de 49
Eugenio Tassa	en el Vezino	de 40
Blas Banegas	en Quingeo	de 40 reservado
Pascual Naulaguari	en el Yunguilla	de 46
Manuel Llinguin	en el Tablón	de 40
Marcial Buele	en Bolo de Pacheco	de 33
Mathías Naula	en Tarque de Abbad	de 50
Phelipe Farphán	en Silván de León	de 33
Marcial Naula	en Tarqui de Abbad	de 49
Bartolomé Carchi	en el Portete	de 42
Melchor Mayaguari	en Siña	de 42
Diego Pacaimoro	en Bullcay de las Madres	de 48
Baltasar Burlan	en Bolo	de 25
Evgenio Chuni	en Pacay de Neyra	de 50
Seuastián Yari	en Bolo de Carrillo	de 37
Lorenzo Carchi	en Chunasana de las Monxas	de 35
Nicolás Naula	en Volo de Pacheco	de 35
Gregorio Venegas	———	de 36
Thomás Vchu	en Zimpali de Bodadilla	de 40
Lorenzo Banegas	en Quinxeo	de 29
Pedro Mingo	en Bolo de Pacheco	de 38
Francisco Mingo	(en Bolo) de Carrillo	de 33
Mariano Mingo	en el Pueblo	de 33
Guillermo Pucha	en Cambi de Barssallo	de 35
Juan Mingo	con Carrillo, digo en Moya	de 37
Pedro Mingo	con Carrillo	de 33
Joseph Yari	en Bolo de Veintimilla	de 39

Manuel Guasca	en Bolo de Carrillo	de 36
Domingo Sicha	en Moya de el General	de 42
Melchor Yari	en Gualaseo de Maldonado	de 29
Esteuan Salan	en Ssina	de 29
Luis Lalbay	en Chunassana	de 29
Severino Naulagnari	en Cartaxona	de 45
Lorenzo Pucha	en Moya de el General	de 36
Santiago Malla	en Simpali	de 30
Thomás Lalbay	en San Pedro de la Compañía	de 29
Lásaro Lalbay	allí	de 28
Joseph Lalbay	allí	de 26
Martín Lliuín	allí	de 28
Carlos Malla	de Serrano	de 25
Joseph Lliuín	allí	de 25
Clemente Atariguana	en las Conchas de Valdivieso	de 25 ausente
Joseph Lalbay	de Serrano	de 28
Miguel Pacaymor	en Bullcay de Astudillo	de 28
Joseph Mayaguari	en Monay de Sánchez	de 25
Gregorio Lligiín	en Passo de Coronel	de 28
Mariano Buel	en el Pueblo	de 28
Joan Ssongo	en Bolo de Pacheco	de 28
Gerbacio Ssongo	allí	de 28
Baleriano Sondor	en Lalcote de dicho	de 28 muerto
Eusevio Yunga	en San Juan de Sit	de 28
Antonio Pacaimoro	en Bullcay de las madres	de 28
Pablo Guasca	en Serrano	de 28
Joseph Guasca	en Patadel de Coronel	de 28
Manuel Malla	en Purín de el Thessorero	de 47
Francisco Mengo	en Quingeo de las Monjas	de 38
Manuel Malla	allí	de 33
Martín Malla	en Cumbi de Barsallo	de 33
Miguel Mingo	de Pacheco	de 28
Thomás Atariguana	en Bolo de Veintimilla	de 28
Joseph Susqui	en Quinxeo de las Monjas	de 30
Manuel Thassa	en el Pueblo	de 28
Joan Thassa	en Moya de el General	de 28
Blas Carchi	en Bolo de Veintimilla	de 33
Joan Carchi	en Passo de Coronel	de 33
Thomás Tassa	allí	de 28
Juan Venegas	en Quinxeo	de 32
Ignacio Sucusia	en Cumbi de Barsallo	de 28
Santiago Lalbay	en Chunassana	de 26
Valentín Lalbay	allí	de 28

Manuel Sondor	en San Juan de Sit	de 26
Marcial Salan	en Shiña de las Monxas	de 26
Mariano Salan	allí	de 27
Melchor Pucha	en San Xavier de la Compañía	de 27
Rosalío Atariguana	en Susudel	de 27
Joan Lligüín	con Carrillo	de 27
Manuel Amaguari	en Zhiña	de 27
Manuel Yunga	en Cumbi	de 27
Francisco Carchi	en Poetata	de 27
Miguel Carchi	allí	de 27
Joaquín Carchi	allí	de 27
Manuel Atariguana	allí	de 27
Pedro Llingüín	en Bolo de Carrillo	de 27
Joseph Guasco	en Passo de Coronel	de 23
Mario Mallaguari	en Bolo de Pacheco	de 27
Felysiana Carchi	en Passo de Coronel	de 27
Isidra Tassa	en el Pueblo	de 23
Gregorio Sagbay	en Chunassana	de 28
Juan Sondor	en San Juan de Sit	de 28
Thomás Naulaguari	en el Portete	de 23
Lorenzo Carchi	en Moya de el General	de 23
Don Dionisio Tassa	en el Pueblo	de 23
Ignacio Buelle	en Bolo de Carrillo	de 23
Nicolás Carchi	en el Pueblo	de 23
Bernando Sueusaca	allí	de 23
Thomás Sicha	en Moya de el General	de 23
Mauricio Malla	en Purín	de 23
Ignacio Sondor	en Gualasseo	de 23
Gerbacio Malla	en Simpali de Bobadilla	de 26
Joseph Malla	en Poetata de el Tessorero	de 20
Antonio Pucha	en Sígseg de Pacheco	de 20
Antonio Pacamoro	en Gualaseo	de 20
Antonio Guasca	en San Antonio	de 22
Pedro Malla	en San Bartolomé	de 20

Hallanze en este Padrón de Yndios de Xima el número de Siento y seis Yndios con el casique de los quales se substraen sinco con dicho cacique cobradores y quedan de residuo Ciento y uno y para que assí conste. Yo el presente Escribano lo firmo en la ciudad de Cuenca

en Veinte y siete de septiembre año de mill settecientos cincuenta y nueve. Hallanse 101 Indios.

Cubillus

Padrones de los indios quintos oriundos

ARAGZAPA

En la ciudad de Cuenca en onze días de el mes de Agosto de mill setecientos cincuenta y siete años, su merced dicho Señor hizo Padrón de dos tercios nauidad de 756 y Sn. Juan de 757 con Don Andrés Guartatanga Cacique de los indios quintos de el Pueblo de San Bartolomé, parcialidad de Aragssapa en esta manera—

El dicho Don Andrés Guartatanga

Juan Tenesaca	en Passo	de 46
Francisco Sancho	en Quinxeo	de 46
Thomás Pucha	allí	de 50
Manuel Tenesela	en Puca de Carrión	de 40
Marcos Vcutala	en Poetata	de 36
Bartholomé Avisicha	en Vcubamba	de 39
Juan Pachar	en Quinxeo de Crespo	de 45
Blas Salco	en Cuenca	de 36
Pedro Sancho	en el Tambillo	de 31
Felisiano Tenesela	en Lalcote	de 29
Domingo Abissicha	en Ocubamba	de 33
Vizente Pindo	en Poetata	de 38
Gregorio Baiansela	en Quinxeo	de 32
Eugenio Salco	en Guncay	de 39
Manuel Tenesela	en Quinxeo	de 29
Ignacio Salco	en Cuenca	de 32
Isidro Paltán	en Quingeo de Andrade	de 36
Blas Pachar	en el Pueblo	de 39
Santiago Baianzela	en Bolo de Carrillo	de 27
Gregorio Salco	en Cuenca	de 29
Joseph Cambisaca	en San Martín	de 36

Alexo Paltán	en Chordeleg de Cabrera	de 28
Feliziano Guailasaca	en el Tambillo	de 26
Alberto Vcuntala	en Quinxeo	de 32
Pasqual Guartatanga	en Tarque de Cuello	de 32 viejo
Nicolás Pachar	con Lusuriaga	de 36
Joseph Bacanzela	en Quinxeo	de 26
Estevan Uiaguari	en Quinxeo de las Monjas	de 26
Francisco Guartatanga	en Tarqui de Cuello	de 29
Vizente Salco	en Baguanchi	de 35
Julián Vyaguari	en la Cría de Lusuriaga	de 28
Joseph Caybinagua	en Monay de Abbad	de 36
Lázaro Pindo	en Susudeel de Serrano	de 25
Agustín Pindo	allí	de 25
Bernardo Pachar	en Quinxeo	de 29
Pedro Tenesela	en Lalcote de las Monjas	de 26
Juan Tenesela	en la Cría de Luzuriaga	de 36
Juan Paltán	en Pillachiquir	de 29
Carlos Paltán	en Purín	de 33
Ignacio Pindo	en Poetata	de 26
Pablo Vcuntala	allí	de 25
Vicente Vayancela	en Cartaxena	de 33
Feliziano Sañay	en Guncay de Avilés	de 24
Seuastían Sancho	en Quinjeo	de 29 muerto
Feliziano Sancho	en el Tambillo	de 25
Joseph Ausicha	en el Vsno	de 24
Nicolás Tenesela	en Passo de Coronel	de 23
Francisco Passar	en Quinxeo	de 28
Carlos Passar	allí	de 24
Martín Viaguari	de Lusuriaga	de 23
Juan Sancho	en el Tambillo	de 23
Gaspar Sondor	en Turi de Landívar	de 23
Miguel Caisinagua	en el Pueblo	de 23
Manuel Cainamagua	allí	de 23
Thomás Vcuntala	en Poetata	de 23
Juan Ucuntala	allí	de 23
Antonio Pindo	allí	de 23
Dionisio Pindo	en Pamar de Carrillo	de 23
Mariano Vyaguari	en Cuenca	de 23
Andrés Bayancela	en Susudel de Serrano	de 20
Calisto Vayancela	allí	de 20
Francisco Guartatanga	en Tarque de Cuello	de 20
otro Francisco Guartatanga	allí	de 20
Ignacio Vyaguari	en Puca de Carrión	de 20
Guillermo Ucuntala	en Quinxeo de Ambrosio	de 20

Hallanze sesenta y tres indios en este Padrón de el Pueblo de Gualaseo de las Parcialidad de Aragssapa de los quales se substraen con dicho cacique dos cobradores y quedan de residuo: sesenta y un indios y para que así conste. Yo el presente Escribano lo firmo en la ciudad de Cuenca en 27 de Septiembre año de mill setecientos cincuenta y nueve años. Hállanze 61 indios.

Cubillus

Padrones de indios quintos oriundos

DUMA

En la ciudad de Cuenca en onze días de el mes de Agosto de mill setesientos cincuenta y siete años. Su merced dicho Señor Corregidor hizo Padrón de dos tercios: navidad de setecientos cincuenta y seis y san Juan de setecientos y cincuenta y siete, con **Don Lorenzo Duma**, cacique principal de el Pueblo de el Sígsig, Parcialidad de Duma, en esta manera—

El dicho Don Lorenzo Duma

Visente Tenecura	en Machángara de Tapia	de 47
Andrés Pussi	en Quinxeo de Ramírez	de 47 reserv.
Francisco Suquinagua	en Chabti	de 45
Esteuan Tenecura	en Bullcay	de 43
Joseph Buele	en el Lalcote de las Monjas	de 39
Nicolás Suquinagua	en Chapte	de 43
Juan Duchimaia	en San Xptoual	de 41
Lucas Cartag	en Rircay	de 40
Manuel Sacbay	allí	de 39
Blas Sagbay	en Bulcay	de 38
Lucas Zilixala	en Quinxeo	de 38
Pedro Buele	en Ziña de las Monjas	de 39
Andrés Cautac	en Lalcote	de 39
Pedro Duma	en Cuenca	de 39
Manuel Tenecura	en Machángara	de 38
Juan Mathías Tenemagua	en Quinxeo	de 36
Esteuan Sagbay	en Tarque de Moreno	de 36
Lucas Buele	en Pillachiquir de Carrillo	de 35

Thomás Pussi	en el Pueblo	de 36
Pasqual Sagbay	en Sina de las Monjas	de 35
Matías Suquinagua	en el Assogue	de 37
Agustín Saquichagua	en Turi	de 36
Manuel Saquichagua	en Tortapali	de 36
Francisco Sagbay	en Tarqui de Moreno	de 38
Sebastián Tenecura	en Bulcay de Astudillo	de 32
Bartolomé Chuba	en Quinxeo de Andrade	de 37
Lucas Cagutag	en Rircay de Morán	de 38
Andrés Cautag	allí	de 39
Manuel Thenechagua	en el Capulí	de 33
Pedro Chuba	en Quingeo	de 33
otro Pedro Chuba	en Pillachiquir	de 29
Pedro Pussi	en Bolo de Carrillo	de 29
otro Miguel Sagbay	en Tarqui de Moreno	de 29
Lope Sanchi	en Gutón de Sáenz	de 29
Xptoual Duchimasa	en San Xptoual	de 30
Marcos Polongo	en Chapti de Piedra	de 33
Mariano Buele	en Pillachiquir de Carrillo	de 29
Manuel Chuba	allí	de 29
Manuel Saquichagua	en Ssaxo de Zedillo	de 28
Carlos Cautag	en Rircay de Morán	de 29
Gregorio Duma, molinero	en Cuenca	de 39
Pablo Saquinagua	en Chapti de Piedra	de 31
Pasqual Suquinagua	en Guallenturu	de 31
Pedro Saquinagua	en Paute	de 31
Marcial Sagbay	en Quinxeo de Ramírez	de 33
Diego Sagbay	en Taquishaca	de 29
Joseph Tenecora	en Machángara	de 32
Francisco Tenecora	allí	de 30
Andrés Lanchi	en Quinxeo	de 46
Miguel Tenecura	en Pillachiquir de Carrillo	de 30
Matías Lanchi	allí	de 37
Melchor Buele	allí	de 33
otro Marcial Sagbay	en los Soldados	de 32
Julián Nanzi	en Natte de Agurto	de 33
Domingo Lanchi	allí	de 29
Pedro Saquinagua	en los Naranjos	de 28
Joseph Yunganaula	en el Assogue	de 28
Ventura Saquinagua	allí	de 27
Marcial Yunganaula	allí	de 29

Miguel Buele	en Cumbi de Barssallo	de 27
Pablo Saquinagua	en Guallentura	de 30
Fernando Silixala	en el Pueblo	de 25
Juan Sagbay	en el Capulí de Ortega	de 25
Pedro Buele	en el Lalcote de las Monjas	de 25
Gaspar Saquinagua	en el Assogue	de 25
Agustín Saquinagua	allí	de 25
Agustín Lliuichinga	allí	de 25
Marcial Saquinagua	allí	de 25
Manuel Saquinagua	en Gualguru	de 46
Julián Saquinagua	en el Assogue	de 25
Juan Pussi	en el Pueblo	de 25 muerto
Manuel Paucay	en Lalcote de las Monjas	de 25
otro Manuel Sagbay	en Tarque de Moreno	de 24
Antonio Cautag	en la Assumpssión	de 24
Bernardo Tenechagua	en Gutón de Sáenz	de 24
Paulino Buele	en el Pueblo	de 23
Nicolás Lanchi	en Gutón	de 23
Juan Buele	en Siña de las Monxas	de 23
Fabián Tenecura	en Bulcay de Astudillo	de 23
Pablo Paucay	en el Pueblo	de 23
Thomás Tenelanda	en Zina	de 23
Evseuio Tenecura	allí	de 23
Seuastían Lanchi	en Vzupud	de 23
Enrique Chuba	allí	de 23
Martín Saquichagua	en Ssarog	de 23
Manuel Yunga Naula	en Cañar	de 23
Mathías Yunganaula	allí	de 23
Pablo Lanchi	en Quinxeo	de 23
Juan Silixala	en Pillachiquir	de 23
Mathías Buele	en Zina	de 23
Bernavé Silixala	en Guangarcucho	de 23
Juan Buele	en Cobzal de Abbad	de 23
Manuel Saquichagua	en Turi	de 23
Mariano Buele	en Lalcote de las Monjas	de 23
Antonio Sagbay	en el Pueblo	de 23
Pedro Sagbay	en Gualaseo	de 23
Plácido Polongo	en Chapti de Piedra	de 20
Mariano Suquinagua Fuárez	en Paute de Doña Andrea	de 20
Carlos Suquinagua, hijo de Domingo	allí	de 20
Valentín Suquinagua, su hermano	allí	de 20
Antonio Tenechagua	en Quinxeo de Andrade	de 20
Francisco Tenemigua	en Quinxeo de Ventura	de 20
Ambrocio	de 20	
Antonio Buele, hijo de María Buele	en el Pueblo	de 22

Hállanze en este Padrón de el Pueblo de el Sígseg de la Parcialidad de Duma, ciento y dos yndios con el Casique, de los quales se substraen sinco cobradores con dicho cacique, y quedan de residuo nouenta y seis yndios, y para que conste. Yo el presente Escribano lo firmo en la ciudad de Cuenca en Veinte y siete de octubre año de mill setecientos cincuenta y nueve. Hállanze 96 yndios

Cubillus

Padrones de Yndios quintos oriundos

BURIN

En el Pueblo de el Sígseg en dose días de el mes de Agosto de mill setecientos cincuenta y siete años. dicho Señor Corregidor hizo Padrón de Dos tercios Navidad de 756 y Sn. Juan de settesientos cincuenta y ciete con **Don Santiago Sánchez** Casique de la Parcialidad de Burín, en esta manera———

El dicho Dn. Santiago Sánchez.

Diego Sibnay	en el Pueblo	de 38
Julián Sambay	en el Chorro	de 38 reserv.
Seuastián Maxsi	en Poetata	de 28 años 55
Francisco Sacasari	en Cuenca	de 39
Pedro Saquinaula	en el Chorro	de 33
Ignacio Pulla	en Nulti	de 33
Martín Queredumbay	en Tarque de Morán	de 50
Joseph Tenelaula	en Cobzal de Abbad	de 39
Ambrosio Duta	en Poetata de Ramírez	de 33
Balthasar Velepucha	en Totorococha	de 35
Valeriano Nugra	en el Chorro	de 29
Clemente Muinudca	en Tutupali	de 30
Mariano Sacasari	en lo de Torres	de 30
Thomás Muinudca	en Tutupali	de 28
Fernando Saquinaula	en Cobssal de Abbad	de 28
Bonifacio Pulla	en el Pueblo	de 28
Evseuio Pulla	allí	de 28
Felipe Sacasari	en Rircay de Morán	de 28
Juan Sacasari	en Tarque de Torres	de 28

Antonio Guapinaula	en Gualaseo	de 27
Mariano Pulla	en el Pueblo	de 26
Joseph Saquinaula	en Tarque de Morán	de 25
Lorenzo Saquinaula	en el Pueblo	de 25
Antonio Saquinaula	allí	de 23
Mariano Saquinaula	en Gullansapa	de 23
Pedro Nabra	en Tarque de Torres	de 23
Ramón Sibnay	en el Pueblo	de 23
Manuel Sibnay	allí	de 23
Pedro Duta	en tarque de Chacón	de 23
Pablo Sacasari	en Tarque de Torres	de 23
Francisco Velepucha	en Totorococha	de 23
Xavier Maxi	en Poetata	de 23
Pablo Sagbay	en el Chorro	de 23
Felipe Sacasari	en Tarque de Torres	de 23
Lorenzo Nugra	en el Pueblo	de 23
Julián Naula	en Tarque de Chapar	de 20

Hállanse en este Padrón, de el Pueblo de el Sízeg de la Parcialidad de Burín treinta y cinco yndios con el cacique: y de este número se substraen tres cobradores con dicho cacique: Y para que así conste, yo el presente Escribano lo firmo en la ciudad de Cuenca en veinte y siete días de el mes de Septiembre de mil setecientos cincuenta y nueve años. Hállanse 33 indios

Cubillus